

Jimena Mercado

TRAS EL DORADO

CRÓNICAS DE LA
EXPLORACIÓN DEL ORO
EN LA AMAZONÍA



Centro de Documentación e Información Bolivia





Jimena Mercado C.

Es boliviana, periodista de investigación especializada en medio-ambiente y economía. A lo largo de sus 20 años de trayectoria trabajó en diversos periódicos nacionales, agencias de noticias y ONG. El 2002 fue seleccionada entre las tres mujeres periodistas para ser parte del Tercer Contingente de Cascos Azules de Naciones Unidas en el Congo, graduada de honor del curso de Corresponsales Antidrogas (2003), invitada por la Embajada de Alemania a cubrir las Elecciones del Bundestag (2009), becada por Inquire First y la Universidad de Fullerton California al curso Transparencia y Periodismo de Investigación (2019).

TRAS EL DORADO

**CRÓNICAS DE LA
EXPLOTACIÓN DEL ORO
EN LA AMAZONÍA**

Jimena Mercado

TRAS EL DORADO

CRÓNICAS DE LA
EXPLOTACIÓN DEL ORO
EN LA AMAZONÍA

la libre
PROYECTO
EDITORIAL

Tras El Dorado
Crónicas de la explotación del oro en la Amazonía

Autora:

Jimena Mercado

© 2021, del texto, Jimena Mercado

© 2021, de la edición, LaLibre Proyecto Editorial

Editorial:

LALIBRE Proyecto Editorial
Humboldt 1135, casi esq. Calancha
Tel. 591(4) 450 4199
Contacto: lalibre.libreriasocial@gmail.com
Cochabamba, Bolivia

Edición:

Ros Amils

Corrección de estilo:

Patricia Quiñones G.

Portada y edición gráfica:

Efraín Ramos

Primera edición: Agosto de 2021

Depósito legal N° 2-1-3931-2021

ISBN: 978-9917-9833-6-1

La presente edición es posible
gracias al apoyo de:

MISEREOR
IHR HILFSWERK



El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del autor y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de las mencionadas entidades.

CONTENIDO

Prólogo: El oro de la selva. <i>Eduardo Gudynas</i>	7
Presentación	13
Dragas chinas y colombianas toman los ríos amazónicos paceños	17
Un pueblo de paso	26
Las dragas chinas	28
Dragas chinas desembarcan en Cachuela Esperanza	31
El empresario y sus vínculos	39
Dragas confiscadas	42
Arcopongo: Sinónimo de ausencia del Estado y presencia de grupos armados	43
Vuelve a correr sangre	52
Los tacana se convierten en mineros	55
Monopolio	65
Empresa china divide al pueblo mosetén	69
Anexos	81

PRÓLOGO

El oro de la selva

Eduardo Gudynas

Una y otra vez el oro regresa a la historia boliviana. En los tiempos iniciales de la irrupción colonial, los españoles estaban obsesionados con la tierra del Paititi, una ciudad o región del oro que estaba más allá de los dominios incaicos en los Andes y se ubicaba en lo que mucho después sería el sur de Perú o las tierras bajas de Bolivia. Más de quinientos años después, la obsesión con el oro está de regreso en esas tierras bajas tropicales.

Su ejemplo más dramático es la minería de oro en los ríos amazónicos. Es la obsesión con el mineral atrapado en las arenas y sedimentos en los márgenes de los cursos de agua tropicales. Con ese fin se talan los árboles, se invaden los ríos, se derrama mercurio que todo lo contamina y se violentan territorios originarios.

En las páginas que siguen, la conocida y respetada periodista Jimena Mercado comparte historias sobre ese tipo de minería que se practica en las tierras bajas de Bolivia. Su aporte es notable por varias razones. Su punto de partida contradice muchas de las posturas populares que imaginan que los mineros solo están presentes en las montañas, las sierras o el altiplano

andino. En este libro se transita por distintos sitios, como la Amazonía del norte de La Paz o las llanuras benianas, donde esa minería afecta territorios propios de pueblos indígenas, como el leco, tacana y mosetén.

La minería aluvial de oro es una práctica que se suma a otras en una geografía que ya está bajo intensas disputas territoriales. Operan factores muy diversos, desde la deforestación para expandir la ganadería hasta los sueños de gigantescas hidroeléctricas, y sobre ellas se aumenta el ingreso de la minería de oro. Por detrás está la demanda internacional. Ese oro no es aprovechado en Bolivia, sino está destinado a compradores externos, y en su mayor proporción tiene destinos suntuarios, como la joyería o para acuñar monedas.

La investigación de Mercado también rompe con otro mito. Es una minería que no es una actividad artesanal que se hace con unas pequeñas bateas en las orillas de los ríos. Avanza con enormes dragas de varias toneladas y, siguiendo las imágenes que nos comparte, algunas de ellas, tanto por sus dimensiones como por la presencia de ciudadanos chinos, merecen el nombre de «dragones». No estamos ante tecnologías minimalistas e impactos acotados; por el contrario, son a gran escala, se remueven enormes volúmenes de arena y agua, con alto consumo de combustible y mercurio, y, como consecuencia, se producen severos impactos ambientales.

Toda esa maquinaria ingresa a la selva y es armada allí mismo, en los márgenes de los ríos. La ausencia de carreteras no detiene su avance, lo que deja en evidencia que los niveles de rentabilidad son tan altos que son capaces de transportar motores, hierros, tornillos y tuercas dentro de la espesura amazónica. Nada los detiene.

También queda en claro que esta explotación de oro se ha transnacionalizado bajo una migración retorcida. Uno de los aspectos más llamativos en estas páginas es que ciudadanos chinos y colombianos operan en los ríos bolivianos. Pero al mismo tiempo, las crónicas sirven para entender los modos por los cuales esa minería también puede ser practicada por algunos que son parte de las comunidades locales y que se resisten a ella. En ciertas situaciones, los comunarios reclaman las concesiones justamente para

impedir que desembarquen mineros desde el exterior, al entender que esa es una opción todavía más depredadora y violenta. En otras circunstancias consideran que de ese modo encontrarán un alivio a sus penurias económicas. Así, los relatos en el libro permiten exhibir todos los claroscuros y las tensiones que desencadena el oro.

Mercado muestra que esta minería se difunde gracias a las complicidades de muchos, como las de aquellos que deberían controlar esas prácticas o proteger esos sitios, pero no lo hacen. Cómplices que pueden encontrarse en esas mismas localidades o en la capital, sea en el Estado como en la política. Las autoridades municipales pueden negar los permisos, pero de todos modos son concedidos en las oficinas en La Paz, entreverando aún más esta situación.

Son condiciones propias de los extractivismos mineros en nuestros países, donde en ocasiones se conceden permisos que otorgan legalidad, pero que a su vez son posibles por el amplio marco de las llamadas «alegalidades», condición por la cual se aprovechan vacíos legales en evaluaciones de impactos sociales, territoriales o ecológicos o se saltan las informaciones y consultas a las comunidades locales. Se cumplen algunas formalidades que sirven para invocar la legalidad, pero en realidad implican un daño social o ecológico que esas normas supuestamente debían evitar. Sobre todo eso, a su vez, siempre están las sombras de las prácticas ilegales, que se repiten una y otra vez porque, a final de cuentas, saben que son impunes.

Por si eso fuera poco, el oro se comercializa en algunos canales formales y en muchos otros ilegales, incluyendo los circuitos de contrabando entre distintos países que tienen por finalidad legalizar el mineral que fue obtenido de modo ilegal. Es una condición indispensable para exportarlo hacia otros continentes.

En este contexto, en el presente libro se destacan algunos testimonios que deben mover a la alarma, y que representan otro de los grandes aportes de Mercado. Por ejemplo, se leerá que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) otorgó permisos a una empresa para actuar a lo largo de 2.500 kilómetros de un río. Estas son escalas escandalosas.

Al mismo tiempo, uno de sus entrevistados señala que en un tramo del río Madre de Dios funcionaban 540 balsas con todos sus efectos en deforestación y contaminación por mercurio. Por tanto, no se está lidiando con unas pocas actividades en uno u otro sitio de un río, sino que es una verdadera infestación de dragas y balsas a lo largo de miles de kilómetros de costas, con toda su estela de destrucción.

De ese modo, los reportajes de Jimena Mercado testimonian cómo se está matando a la naturaleza y cómo eso avanza de la mano de una creciente violencia. Es que el oro alimenta los conflictos, y enseguida aparecen las amenazas de muerte, los enfrentamientos entre grupos con la pretensión de controlar el territorio. Estallan las rencillas ante los que quieren evitar el ingreso de los mineros, las peleas entre mineros locales contra los que vienen de otras regiones o países o los enfrentamientos de cooperativas locales, como la de Ullakaya Condoriri II, contra grandes empresas. Hechos como los ocurridos en Arcopongo exhiben claramente que esta minería fabrica conflictividad y violencia una y otra vez. La tristeza ante estas condiciones es que esos conflictos, de un modo u otro, terminan siendo disputas entre distintas formas de explotar el oro o, dicho de otro modo, entre distintas formas de matar la naturaleza.

En las siguientes páginas, Mercado muestra lo que ocurre realmente en el terreno, una realidad repleta de contradicciones en ambientes de riqueza ecológica y pobreza en las comunidades. Se aprovecha, de gran manera, las posibilidades de un periodismo narrativo que comparte las sensibilidades y tensiones que cruzan este tipo de actividades, y que los textos académicos no siempre pueden incorporar. Pero también refleja las contradicciones muchas veces ignoradas, como cuando dentro de una comunidad local están esos muchos que se oponen a los extractivismos, aunque hay unos pocos que desean ser mineros. Tener esa conflictividad presente es de enorme importancia porque indica que están en marcha cambios culturales enormes.

Las historias brindadas por Mercado se extienden a lo largo de sucesivas convulsiones en Bolivia, como el Gobierno del Movimiento Al Socialismo

(MAS) con Evo Morales, los graves conflictos ciudadanos, la presidencia de Jeanine Áñez, el regreso del MAS, y enseguida el estallido de la pandemia por el covid. A pesar de estas circunstancias, la explotación de oro continúa allí, en la selva, en esos apartados rincones del país, indiferente a los recambios en los sillones ministeriales o la diseminación del virus. Esta situación deja muy en claro las poderosas fuerzas que están detrás de ese tipo de desarrollo. Regresan enseguida esas imágenes del Paititi cuando hoy, en el siglo XXI, otra vez están llegando los colonizadores a buscar el oro de nuestras tierras, y nuevamente producen destrucción y violencia.

Los reportajes de Jimena Mercado están escritos con rigurosidad y también con amenidad, con detalle y con ritmo, con información y con sensibilidad. Esta es una publicación para celebrar y una autora para felicitar no solo por la calidad de esta labor periodística, sino también por su condición de mujer, ya que sabemos que no es nada fácil para ellas transitar solas, y con una cámara, los senderos del oriente boliviano. Todo esto tiene el valor de mostrarnos una problemática que para muchos pasa desapercibida, pero encierra una creciente gravedad por sus consecuencias tanto sociales como ambientales. Por ello, les invito a leer este libro.



Imagen referencial editada (Fotos de pexels.com)

PRESENTACIÓN

Como resultado de la profundización del modelo extractivista en Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), los pueblos indígenas son más vulnerables que antes a las actividades mineras e hidrocarburíferas. En ese esquema, la Amazonía es la macrorregión más impactada por la nueva fiebre del oro en el país, que se caracteriza por su voracidad imparable y múltiples efectos socioambientales.

«Tras el dorado. Crónicas de la explotación de oro en la Amazonía de Bolivia» es el resultado de cinco travesías realizadas entre el 2018 y 2021, con un vacío obligado en 2020 como consecuencia de la pandemia del covid-19 y la restricción obligada a áreas protegidas y territorios indígenas por su alta vulnerabilidad. En este periodo, irónicamente, no se frenó la actividad aurífera motivada por la escalada de precios del metal en el mercado internacional.

En honor a la verdad, estos reportajes no fueron elaborados pensando en convertirlos en crónicas y menos en un libro, fue a la inversa; pues una vez que concluí cuatro reportajes que generaron un impacto importante, tanto en el ámbito periodístico, académico como en la sociedad y en diferentes niveles del Estado, consideré escribir un libro que recogiera las historias detrás de las travesías y las investigaciones. La idea difusa fue reforzada

por algunos colegas, que me alentaron en este propósito dada la actualidad y gravedad de la situación, que marca un antes y un después en la explotación aurífera en nuestra Amazonía con la incursión de las dragas chinas y colombianas a territorios indígenas y áreas protegidas de la mano de cooperativas mineras locales.

La riqueza del libro está en el rescate de las experiencias vividas en los viajes por las accidentadas rutas de la Amazonía, desde caminos polvorientos de la provincia Inquisivi, donde confluyen rutas de la coca y el oro, pasando por Nor Yungas, el norte de La Paz, hasta llegar a los ríos Kaka, Beni, Madre de Dios y La Paz. También, muestra el peligro detrás del trabajo de investigación, ya que se afectan intereses de grupos de poder económico y político con situaciones impredecibles.

El proyecto original planteaba hacer las crónicas de los siguientes reportajes: «Ausencia del Estado en ArcoPongo deriva en la explotación ilegal del oro a gran escala», «Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía tras la fachada de cooperativas», «Dragas chinas llegan a Cachuera Esperanza de la mano de una empresa para explotar oro por 30 años» y «Tacanas se convierten en mineros para frenar el avance chino en el río Madre de Dios». Los cuatro fueron publicados por la Agencia de Noticias Fides (ANF) y financiados unas veces con recursos del medio y otras con fondos concursables para la investigación periodística, en un contexto adverso para los medios críticos e independientes. Quizás sirva para dimensionar el esfuerzo que en promedio el presupuesto empleado en cada incursión fue menor a mil dólares.

Sin pretenderlo, me constituí en la periodista que develó la explotación ilegal de oro por parte de ciudadanos chinos y colombianos en complicidad con las cooperativas locales en los ríos amazónicos de Bolivia y el uso de gigantes dragas que desplazó tecnologías menos depredadoras. Con los reportajes se logró algunas respuestas del Estado, que se tradujeron en megaoperativos con aprehensiones temporales y registros para la cámara, pues la problemática persiste.

En plena pandemia, en marzo de este año, viajé a territorios indígenas en calidad de periodista freelancer y escribí «Empresa china divide al pueblo mosetén para ingresar a su TCO en busca de oro». El artículo fue publicado por la nueva Agencia de Noticias Ambientales (ANA) y el diario Página Siete, con el financiamiento del Fondo Spotlight de la Fundación para el Periodismo (FPP). El reportaje permitió darle actualidad a la temática y demostrar que el problema no solo se agudizó, sino que se expandió a diferentes territorios.

Encaré los reportajes sin prejuicios, dispuesta a sorprenderme con cada realidad, sin saber exactamente qué encontraría en el camino, solo con la curiosidad de saber en terreno hasta dónde llegan las presiones del extractivismo sobre nuestros pueblos amazónicos. La investigación, marcada por las travesías en la región amazónica de Bolivia, no solo abarca territorios indígenas como el leco, tacana y mosetén, sino también muestra diferentes aristas de esta compleja realidad que conlleva la vulneración de los derechos ambientales, así como de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y originarios.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados por el Estado, de buena fe, de forma libre, previa e informada, para dar o no su debido consentimiento a cualquier actividad administrativa o legislativa que les afecte, pero este derecho en demasiadas ocasiones fue vulnerado. Los hechos demuestran que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), instancia que otorga los derechos mineros, actúa de acuerdo con cálculos políticos y económicos, y que sus acciones no se basan en principios de legalidad, y mucho menos en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos ambientales o de la salud de la población.

El rol del Servicio Intercultural de Fortalecimiento a la Democracia (Sifde), dependiente de los diferentes Tribunales Electorales Departamentales, fue observado por los pueblos afectados. Estos denunciaron que se parcializó a favor de los intereses de las cooperativas mineras y empresas en detrimento de sus derechos. Evidenciaron que lejos de acompañar un proceso transparente de consulta se limitó a dar el visto bueno administrativo que

solicitó la AJAM, sin considerar aspectos técnicos, legales, administrativos ni éticos de las comunidades afectadas por la minería.

Este libro no pretende ser una obra literaria ni constituirse en un documento académico, es un aporte desde el periodismo narrativo que se basa en diferentes métodos de investigación, expone las complicaciones que se enfrentaron, los riesgos que conllevó, pero sobre todo plasma un periodo crítico para la realidad amazónica y los recursos naturales no renovables. Se trata de un relato testimonial de los hechos, y para ello se contó con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) que no dudó ni un minuto en publicar el trabajo a través de la editorial laLibre. La alianza se dio de forma natural, pues las investigaciones realizadas en la Amazonía consideraron no solo aspectos ambientales del extractivismo en sus diferentes formas, sino la mirada más humana desde el ámbito de los derechos humanos.

También la Fundación para el Periodismo decidió apoyar el proyecto, como parte de la visibilización de los artículos elaborados en el marco de los fondos concursables para el periodismo de investigación. Igualmente, la ANF posibilitó las condiciones para la realización de los reportajes, y sin pretenderlo se constituyó también en parte fundamental de este libro.

Jimena Mercado

**DRAGAS CHINAS Y
COLOMBIANAS TOMAN LOS RÍOS
AMAZÓNICOS PACEÑOS**



RURRENABAQUE

GUANAY TEOPONTE

CARANAVI

LA PAZ

Imagen referencial (Roman Bader, Pixabay)

DRAGAS CHINAS Y COLOMBIANAS TOMAN LOS RÍOS AMAZÓNICOS PACEÑOS

—¿Ventana o panorámica? —pregunta impaciente el conductor del «rapidito», vehículo de siete pasajeros, que se apresura a cerrar las puertas para partir de la terminal de Minasa de La Paz a Caranavi. Respondo con otra pregunta, ¿qué asiento es el panorámico?

—El del medio, detrás del chofer, es el único que queda.

Me encojo de hombros y asiento con la cabeza. «¿Para qué me pregunta?», me digo.

Son más de las siete de la noche y debo llegar a mi destino en aproximadamente cuatro horas. En La Cumbre, a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, en lugar de disminuir la velocidad por la neblina en la carretera, el dueño del volante aprieta el acelerador a más de cien kilómetros por hora, cuando lo permitido es sesenta a ochenta por ser rutas accidentadas que están entre precipicios.

El conductor se detiene en una curva y echa alcohol al suelo, como ofrenda a la tierra. «Este hombre cree que haciendo eso nos salvaremos de la muerte», pienso. Luego invade carril y sobrepasa a un trailer en plena curva sin saber si del otro lado viene otro vehículo que podría chocarnos. Le reclamo, pero el resto de pasajeros duerme.

Entre sobresaltos llegamos a la parada de Caranavi, ahí me espera un guía leco, Waldo Valer. No lo conozco, pero lo recuerdo por sus fotos con pinta de rockero de los ochenta, con una pañoleta amarrada en la cabeza y junto a una moto. Se nota que disfruta de su trabajo, lo que incluye el turismo de aventura con grupos de extranjeros que aman la selva. Apenas conversamos por WhatsApp y el chat del Facebook; lo recomendó otro indígena, el líder Alex Villca de la comunidad de San José de Uchupiamonas, ubicada en el Parque Nacional Madidi. Él no cesa en denunciar, en todos los foros a los que asiste, los intentos del Gobierno de Evo Morales de construir megahidroeléctricas en el estrecho de El Chepete y El Bala, en plena Amazonía.

En la terminal de Caranavi un hombre grueso se acerca, lleva la pañoleta característica.

—¡Waldo!

Tras descansar en un hostel, a las seis y media de la mañana de un día de semana de junio de 2018 partimos a Teoponte. Antes decidimos desayunar porque no sabemos cuántas horas estaremos sin comer. Nos servimos un rico desayuno yungueño que contiene huevo, carne asada, arroz graneado, tomate en rodajas, café caliente y un pan.

Afuera el taxista espera para llevarnos a nuestro destino. Maneja una vagoneta Ipsum; los caminos interprovinciales están llenos de este modelo, ya que ingresó al país de manera masiva sin póliza de importación, sin impuestos y, por tanto, sin placa de circulación. Muchos de estos carros son «transformes». Sabemos que si nos accidentamos en el camino el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) no cubrirá los daños. Como siempre, le encomiendo al flaco de arriba la misión.

Ya en el vehículo, vamos más al norte de La Paz por caminos de tierra, hasta llegar al ingreso del municipio de Teoponte. Waldo sugiere parar. Caminamos hacia el borde de la vía, el precipicio está a nuestros pies. Al frente, a las orillas del río Kaka, encima de un enorme planchón se observa maquinaria de alto tonelaje. Algunas retroexcavadoras están en la faena del desmonte. Saco mi cámara fotográfica y filmadora Canon semiprofesional para capturar imágenes de lo que estoy viendo.

—Esto apenas empieza, amiga, ya verás más adelante cómo los chinos nos han invadido —advierte Waldo.

No es casual la presencia extranjera en Teoponte. En la década de los ochenta, la empresa canadiense South American Placer Inc. (SAPI) extraía alrededor de treinta kilogramos de oro al día y lo exportaba sin mayor control a Estados Unidos. En los noventa, la Corporación Minera del Sur (Comsur), de propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003), compró las concesiones de SAPI, y de ahí la extracción minera pasó casi en su totalidad a las cooperativas.

La Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), gestado por el boliviano Inti Peredo, eligió Teoponte para su proyecto político armado tras el fracaso de la Guerrilla de Nancahuazú, ya que Ernesto Che Guevara fue abatido en 1967 por las fuerzas militares. El municipio no solo tiene un valor histórico y turístico, sino también un gran potencial aurífero.

Los recursos naturales de esta hermosa y rica región del norte de La Paz, sobre todo el oro, por décadas fueron saqueados. Irónicamente, las poblaciones auríferas son las más atrasadas de la zona, como Teoponte, Guanay y Tipuani que forman el cordón aurífero más codiciado. Esa lógica no cambió, es la misma del extravismo minero que deja ruinas y pobreza a su paso.

Mientras tomo las primeras imágenes de la travesía, los operarios de la draga colombiana se detienen al percibir que los observamos. Después de sacar fotos y filmar subimos al taxi. De camino al pueblo se observan piezas gigantes de fierro, incluso en algunos sectores la chatarra enzarrada de las dragas chinas yace en las riberas del río como enormes naufragios de acero, sin que nadie obligue a retirarlos para que no contaminen.

Ya en Teoponte vamos a la Alcaldía Municipal para obtener información. De salida encontramos a la alcaldesa interina del municipio, Patricia Calderón, a quien le insisto para conversar sobre la problemática aurífera y la presencia de las dragas chinas y colombianas en su jurisdicción.

—Lo peor es eso, que hay permisos desde arriba. Hemos llegado hasta al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Minería, a muchas instancias y

hemos chocado contra la pared. Me he sentido muy agredida. Nosotros somos un pueblo tranquilo, pacífico, pero también merecemos consulta —confiesa.

Ante la impotencia de saber que los extranjeros cuentan con el aval del Gobierno de Evo Morales para explotar oro, la autoridad local afirma que el Concejo Municipal aprobó una ley para reglamentar la convivencia de los foráneos en su territorio. Esta norma fue pensada con el fin de prohibir a los ciudadanos chinos y colombianos a relacionarse o hablar con las menores de edad, beber en lugares públicos o involucrarse en riñas y peleas.

—Deben firmar un acuerdo de buena conducta.

El artículo 19 de la Ley Minera 535 de 2014 establece que «las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos gozan del derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, conforme al régimen de regalía minera sin perjuicio de medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta previa».

—Pero ¿cuál consulta?, ni previa ni libre ni informada. Si las autoridades municipales no se enteraron de esta, es que no la hubo.

En su oficina está el concejal Edwin Peñaranda, a cargo de la Comisión Tierra y Territorio del municipio de Teoponte. Este advierte que la presencia de dragas chinas y colombianas en su territorio es mucho más grave que un asunto de convivencia pacífica con los extranjeros.

—Hemos metido notas el 14 de junio de 2017, hemos pedido informe al ministro de Minería, César Navarro, se ha solicitado información para saber cómo están ingresando al país los extranjeros, cómo han metido esos planchones para armar semejantes dragas. Enviamos notas a don Remberto Chávez de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferresco), el 22 de julio, y no recibimos ninguna respuesta. Se pasan la pelotita entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, Minería y Medio Ambiente, nos mandan a la Gobernación, no hay seriedad para responder.

Peñaranda fue amenazado de muerte. Y debido a sus reclamos, una marcha de cooperativistas con dinamitas en mano llegó hasta la Alcaldía. Dice que una inspección municipal, realizada el 9 de agosto de 2017, desde la comunidad de Mayaya sobre el río Kaka hasta llegar al pueblo de Teoponte, comprobó la presencia de siete dragas con los denominativos: Dragón 1, Dragón 2 y así sucesivamente.

—Ya hay muchos «dragones», y ahora vemos aquí en el sector de Guanay que también hay chinos; el río Challana está lleno de colombianos. Es una pena para los teoponteños y por qué no decir, para los bolivianos.

En Teoponte todo huele a minería y a oro, que contrasta con la pobreza. Cada casa, cada tienda y cada letrero están ligados a ese destino.

La ley minera, aprobada el 2014, significó profundizar en la lógica extractivista y colonial del neoliberalismo, y bajo el cliché de la minería como actividad estratégica del desarrollo económico se permitió su avance. Por eso, esta se sobrepuso de manera preferente a otras actividades productivas y a territorios de características forestales, comunitarias y áreas protegidas.

Peñaranda respalda lo dicho con documentos que saca de su escritorio y que demuestran el loteamiento, dispuesto por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de cuadrículas mineras en las orillas de los ríos que conectan con la Amazonía.

En una carta del 11 de julio de 2017, el director de la autoridad minera, Erik Ariñez, señala: «La AJAM no suscribió ningún contrato administrativo minero con empresas de nacionalidad china», lo cual deja entrever que la presencia china se debe a sus alianzas directas con las cooperativas. Sin embargo, en la misma misiva figuran autorizaciones transitorias especiales para diecinueve cuadrículas, antes conocidas como «concesiones», a favor de Jin Kang, como actor productivo minero de las áreas Amalia y Oriente II. Cada cuadrícula mide veinticinco hectáreas.

Según datos de Fundempresa, Jin Kang es una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Cochabamba, especializada en prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, comercialización, exportación

de minerales y metales e importación de maquinaria. Cuenta con la matrícula de comercio 00178407.

Solo en Teoponte —hasta entonces— se aprobaron cuatro autorizaciones transitorias especiales por pertenencias (exconcesiones), veintinueve autorizaciones transitorias especiales por cuadrícula, cincuenta y dos contratos mineros que datan de antes de la Ley 535, trece áreas mineras en trámite, un área en trámite administrativo en aplicación a la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros y cuatro áreas reservadas para el Estado.

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecomán) detalla que 327 cooperativas auríferas que operan en el departamento no presentaron su documentación a la AJAM para su control y fiscalización, mientras que otras 142 lo hicieron de manera parcial, pero aun así operan.

Un viejo ventilador remueve el aire caliente. Peñaranda recuerda un episodio doloroso para él. En su oficina y por rechazar las sociedades ilegales con los extranjeros, un cooperativista le dio un puñetazo en el rostro.

—Ellos (los extranjeros) se llevan el setenta por ciento del oro y lo más triste es que ni siquiera lo venden en Bolivia. Mucha gente tiene miedo de salir a la prensa a dar algunas versiones porque pueden atentar contra su vida, no sabemos qué tipo de personas están en este sector; usted sabe que la mafia china está por todas partes.

Después de conversar con las autoridades, me reúno con el máximo dirigente del Control Social de Teoponte, Juan Arnez, que está en su pequeña oficina instalada frente a la plaza principal.

—Lo que hemos visto son contratos con las cooperativas mineras. Hay, por ejemplo, en Mayaya tres dragas del señor Velarde —un cooperativista acaudalado— y que ha hecho contrato directo con los chinos y así se van camuflando, pero no quieren apoyar en obras sociales —denuncia.

Arnez, que ya vive más de seis décadas y lleva las marcas del trabajo en sus manos, guarda recuerdos de su juventud y asegura que Teoponte siempre atrajo a gente codiciosa. Teme que la situación ahora sea mucho más grave



Waldo Valer, guía turístico leco en caminos de tierra que conectan Teoponte con Guanay. (Foto: Jimena Mercado-ANF)

por el aumento acelerado de la presencia de las empresas chinas en el país y porque varias se dedican a actividades poco amigables con la naturaleza. Después de conversar con el dirigente, Waldo aparece en su moto, listo para viajar a Guanay.

—Iremos ida y vuelta, y tendrás más claridad sobre lo que sucede en esta zona.

Dispuesta a verificar lo escuchado, con mi mochila en la espalda me sujeto a Waldo. Cada que hay un rompemuelle improvisado brinco y estiro su polera porque no logro unir mis manos alrededor de él. Ya ni recordaba cuándo fue la última vez que subí a una moto, pero me digo: «Esto debe ser parte de esta loca travesía». El viento refresca y hace llevadero el clima.

Descendemos por un camino de tierra; es inevitable el baño de polvo cada que un vehículo pasa por nuestro lado. Es cerca del mediodía y el sol quema nuestros rostros; hacemos varias paradas para la toma de imágenes de las dragas que operan en las orillas del río o de los inmensos basureros de chatarra desechada por estas empresas.

Un pueblo de paso

Después de casi una hora de viaje llegamos a la Alcaldía Municipal de Guanay. Allí encontramos a Jimmy Ruiz Smith, un joven profesional que estudió en el extranjero y que es representante del Control Social.

Cuenta que un operativo conjunto entre el Concejo Municipal, la Armada Boliviana y la Unidad de Minería de la Alcaldía paralizó la instalación de una enorme draga en el cruce de los ríos Challana, Tipuani y Mapiri.

—Las autoridades municipales no autorizan este tipo de trabajos que vienen del Gobierno central, de la AJAM, del Ministerio de Minería, pero lo que nos preocupa es el daño ecológico, el daño al medioambiente porque el Ministerio de Medio Ambiente ni viene.

Al momento del operativo, los ciudadanos chinos dijeron tener el permiso de la AJAM a favor de Challana River Golden. Recuerda que desde el 2010, por ordenanzas municipales, se prohibieron trabajos mineros en el área urbana de Guanay. Afirma: «Eso se ha planteado porque una vez que empiece esa draga será imparable».

Guanay es un pueblo forjado por la fiebre del oro y se ha congelado en el tiempo; las calles polvorientas, las casas despintadas y construidas hace décadas no muestran desarrollo municipal. Es casi un campamento de paso.

Debía hablar con el alcalde, pero nos enteramos que no está en su oficina. Conversamos con el presidente del Concejo Municipal de Guanay, Uber Carrasco, quien asegura que en los dos últimos años se intensificó la presencia de colombianos y en mayor cantidad la de chinos. Deja en claro que como autoridades locales en ningún momento autorizaron el ingreso de extranjeros para operar en la zona, sin embargo, estas empresas se aliaron con cooperativas asentadas en la región.

—Entendemos que los escombros que están dejando (las dragas) están entrando al río y eso va a generar desbordes, tenemos una comunidad, Challana, que con la crecida de río podría ser muy afectada. Hoy por hoy



Pontón colombiano se desplaza con maquinaria pesada por el río Kaka. Lleva hasta la bandera boliviana pintada en su estructura. (Foto: Jimena Mercado-ANF)

nos preocupa el medioambiente, el ecosistema, la salud de nuestros ríos porque se podría sufrir una tremenda inundación.

Es la hora del almuerzo y decidimos comer en una pensión. Waldo pide pollo a la broaster y yo sábalo. Pronto me doy cuenta de lo contaminado que está el pescado, está muy salado, percibo sustancias que no puedo distinguir, pero sospecho que se trata de mercurio. No es descabellada la idea considerando que Bolivia es el segundo mayor importador de este metal del mundo. Al país ingresan unas doscientas toneladas al año.

Retornamos a Teoponte, donde Waldo vive, porque tenemos planificado madrugar al día siguiente para navegar en un deslizador —embarcación fluvial a motor— hasta Rurrenabaque, en el departamento de Beni. Pasaremos por los ríos Kaka y Beni, una decena de comunidades indígenas, bordearemos el Parque Nacional Madidi y el Área de Manejo Integrado Reserva de Biósfera Pílon Lajas, además de atravesar los estrechos de El Bala y El Chepete.

Las dragas chinas

Todavía no termina de amanecer y salgo del albergue municipal donde me alojé. El taxi que nos llevará hasta las orillas del río Kaka espera. Cuando el pueblo aún duerme, empezamos a navegar. Es una sensación única estar en medio del río, rodeada de la naturaleza y esperar los primeros rayos del sol, hasta que despierto totalmente del hechizo.

El sonido de la corriente de los ríos Kaka y Beni es silenciado por los motores de las gigantes dragas chinas o «dragones» y otros planchones colombianos, que llenaron las orillas de alfombras de piedras a modo de «reposición del suelo». En estas fértiles riberas de la Amazonía hace apenas dos años todavía se producía maní, había frondosos platanales y crecían cítricos de varias especies.

Los «dragones» llevan banderas bolivianas y hasta permisos de la AJAM. Estas imponentes dragas de fierro operadas por personal extranjero emplean miles de litros de diésel subvencionado, pero no mano de obra, pues basta con dos o tres operarios asiáticos para hacerlas funcionar hasta veinticuatro horas al día.

Estas máquinas llegaron al país de la mano de extranjeros con fuertes capitales y dispuestos a explotar los recursos naturales no renovables. Con este objetivo se asociaron con cooperativas locales que les entregaron sus extensas concesiones de terreno o cuadrículas a cambio del veinte o treinta por ciento de las ganancias que obtengan por la explotación de oro.

Mientras navegamos no dejo de sorprenderme por el tamaño y la envergadura de las dragas y los planchones que se deslizan impunes por la Amazonía. Llegamos a Mayaya, una comunidad estratégica ubicada sobre el río Kaka; la actividad minera es intensa. Las relaciones entre los comunarios y chinos son fluidas, los primeros se ocupan de proveer combustible en turriles y los segundos, de operar los gigantes «dragones».

Apenas llegamos a la comunidad, la gente se puso a observarnos y a murmurar. Lo bueno del caso es que conocen a Waldo, quien fue a este lugar con

varios grupos de turistas. Comemos en un restaurante rústico y compramos algunos productos para el camino, como galletas, sándwiches y mucha agua. Durante el viaje observamos máquinas que explotan oro y otras que fueron abandonadas en pedazos, mientras el río lava los fierros oxidados.

Waldo recuerda que cuando era adolescente el agua de los ríos de la zona era cristalina, las playas de las orillas sumamente fértiles y la actividad pesquera y barranquillera pujante. Como oriundo del lugar se siente indignado y dispuesto a denunciar el daño irreversible ocasionado en la Amazonía, precisamente durante el Gobierno de Evo Morales, que se reclama como defensor de la Madre Tierra.

Sospecha que detrás de la minería depredadora «hay toda una estrategia promovida desde el nivel central para eliminar el ecoturismo y las actividades económicas y productivas de la región para imponer la megahidroeléctrica El Chepete-El Bala». Cree que con ello los indígenas no tendrán más que aceptar el proyecto, al cual se opone por considerar que inundará parte del Madidi y de Pílon Lajas.

Proseguimos el viaje y dejamos atrás Mayaya, comunidad de intercambios de servicios y dinero. El recorrido es fascinante. No podemos resistirnos a ingresar al Madidi y hablar con el guardaparque, quien no tiene permiso para dar entrevistas, pero aprovecha nuestra visita fugaz para expresar su preocupación por el avance de las dragas chinas.

—Todavía no llegaron al parque (las dragas), pero una vez que lo hagan será irreversible el daño, ya no podremos mostrarnos al mundo como el área más biodiversa —afirma mientras algunos animales silvestres del lugar se nos acercan, parece que están acostumbrados a las visitas.

Debemos seguir navegando hasta llegar a una comunidad de la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria Pílon Lajas. Aunque no encontramos al cacique del lugar, su esposa da fe que la zona cambió desde la llegada de los chinos, pues por el ruido de las dragas los chanchos de monte y otros animales silvestres se escapan a las profundidades de la selva, por lo que cada vez es más difícil cazarlos para consumo familiar.

Mientras navegamos extasiados por la frondosidad de la selva, pasamos por el estrecho de El Bala y El Chepete. En este punto el cielo se torna oscuro, comienza a llover y todavía falta un buen trecho para llegar a Rurrenabaque. Ya no se ven dragas por esta zona.

Aunque el deslizador tiene un techo de hule, siento que llueve más adentro que fuera porque nos balanceamos con la fuerza del viento; es como si estuviéramos sobre un barco de papel que se deja llevar por la corriente del río. Apenas somos cuatro personas en la embarcación: el motorista, su asistente, Waldo y yo. Sabemos que si chocamos con los troncos que arrastra el río corremos el riesgo de volcarnos, pero en lugar de tener malos pensamientos preferimos cubrirnos con nuestros rompevientos. Guardo rápido los equipos para que no sufran daños y me sujeto fuerte a la embarcación mientras el agua recorre por mi cara sin parar. Ninguno lleva chaleco salvavidas.

Llegamos a Rurrenabaque, municipio beniano, al promediar las seis de la tarde. Estoy emocionada. No importa que esté mojada y empolvada, ni haber madrugado y arriesgado tanto. Siento que llevo una gran historia en mi libreta y cámaras, que debo compartirla.

La travesía por los ríos Kaka y Beni desde Teoponte hasta Rurrenabaque entre frondosos bosques enigmáticos provocó la elevación de mi espíritu hasta el cielo por la grandiosidad de la naturaleza boliviana, pero me hirió casi de muerte el ser testigo de las grietas que se abren en las orillas, los promontorios de piedras que reemplazan los cultivos, los rostros de angustia de indígenas que observan cómo sus territorios son invadidos no solo por mineros locales, sino por «dragones» enormes que se tragan todo a su paso.

Los capitales chinos no vinieron al país a invertir, tampoco a generar empleo, menos a buscar relaciones empresariales equitativas. Llegaron con toda su voracidad a extraer el oro aluvial de la Amazonía, basados en datos geológicos y mineros que se les ofreció como señal de «amistad» entre los pueblos.

El reportaje «Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas» fue publicado por la Agencia de Noticias Fides el 18 de junio de 2018 (<https://social.shorthand.com/noticiasfides/jCjy8mXAix/chinas-y-colombianas-explotan-ilegalmente-oro-en-la-amazonia-con-la-fachada-de-cooperativas>).

**DRAGAS CHINAS
DESEMBARCAN EN CACHUELA
ESPERANZA**



CACHUELA
ESPERANZA

ORO
BLANCO

RIBERALTA

Balsero beniano a la orilla del río Beni afirma que la actividad aurífera tiene sus altas y bajas de acuerdo al nivel del río (JM-ANF)

DRAGAS CHINAS DESEMBARCAN EN CACHUELA ESPERANZA

Cachuela Esperanza. Bello nombre para un risueño pueblo histórico que vivió desde el siglo XIX la ilusión de la opulencia efímera. Todavía se alza entre ruinas y baldosas finas, traídas de Europa, del teatro que mandó a construir el magnate Nicolás Suárez para acoger a Enrico Caruso, popular tenor italiano de finales de esa época, durante el auge de la goma.

Caruso no llegó y Cachuela se hundió en el olvido tras el auge del caucho. Un siglo después, desembarcaron las dragas chinas detrás de otro tesoro efímero: el oro de los ríos de esta paradisíaca región de la Amazonía boliviana.

Llegué a Cachuela Esperanza el segundo día de mi estadía en el departamento de Beni, porque en el primero con el secretario de Conflictos de la Federación Regional de Campesinos Madre de Dios, Eslimer Tirina, navegamos varias horas por el río Beni sin encontrar nada más que balseros solitarios a las orillas del imponente afluente.

Para ir ahí contratamos un taxi que nos llevó por la gredosa carretera de Warnes hasta el río Beni. Descendimos del vehículo enfangado para cruzar a la comunidad La Banda en un pontón, donde había varios pasajeros que tenían los pantalones doblados y salpicados de barro hasta las rodillas. Muchos subieron sus motos y otros sus gallinas, de estas sus cabezas estaban fuera de las bolsas de lona.

En Loma Alta alquilamos una chata —precaria embarcación pluvial— que nos llevó por Puerto Román, Santa Crucito y Palmira. Transcurrieron las horas y sentíamos que nuestros rostros ardían por la intensidad de los rayos del sol y el reflejo del agua. En el camino no vimos una sola draga. Me arrepentí todo el día por haber elegido un transporte lento y costoso.

Navegamos hasta el atardecer y cuando pensaba que volveríamos a Riberalta con las manos vacías, decidí conversar con un balsero solitario que estaba a las orillas del río.

—Estamos buscando dragas chinas —le dije.

—Te equivocaste de ruta —se rio—. Ahora ya no alcanzas, mañana debes irte hacia Guayaramerín y de ahí a Cachuela Esperanza. Ahí ya están los chinos.

Tras agradecerle aproveché de sacarle fotos. Posó muy contento mientras comentaba que cada vez menos oro se saca del fondo del río; cree que las enormes dragas llegaron a la Amazonía para saquear hasta el último gramo.

Miré al guía como diciéndole: «¿Y don Eslimer, usted no sabía eso?» Pero me acordé que es zafrero y que su especialidad es la castaña y no la explotación de oro. Me culpé por precipitar las elecciones, pero la otra opción era un operario de balsas auríferas, que lo comprometería con su sector y significaría un conflicto de intereses.

Volvimos a Riberalta con la intención de retomar la travesía al día siguiente. En ese municipio, la Asociación de Balseros (Asobal), dedicada a la explotación de oro aluvial y con fuerte presencia en la región amazónica, podría tener la tentación, como los cooperativistas, de ceder sus derechos mineros, es decir, sus cuadrículas a los foráneos.

Es jueves de noviembre de 2018. Partimos a primera hora de Riberalta a Guayaramerín por un camino asfaltado. En esta ciudad —ubicada al norte de Beni, en la frontera con Brasil y a orillas del río Mamoré— se respira juventud, alegría y música brasileña. Sus calles están copadas de hombres, mujeres y adolescentes que conducen motos con ropa ligera y sandalias.

Hasta familias enteras se trasladan en este motorizado de dos ruedas. No puedo dejar de extrañar a mis hijos, sobre todo a la menor.

En el mercado de Guayaramerín compramos comida y bastante líquido. Desayunamos el característico loco, pues como salimos a las seis de la mañana de Riberalta no alcanzó el tiempo para comer.

En Cachuela Esperanza respiramos aires del pasado. Este lugar —perteneciente al municipio de Guayaramerín y a la provincia Vaca Díez— un día fue el centro de administración de las transacciones comerciales hacia Europa. Ello permitió que el pueblo tenga instalación energética propia, excelente comunicación telegráfica, pequeños ferrocarriles y, sobre todo, flotas fluviales para el transporte de la producción gomera.

Pasó de haber tenido en el siglo XX el mejor establecimiento industrial, comercial y arquitectónico de influencia europea, a quedar en el olvido. Algunas casas están en ruinas y claman su refacción y restauración, dice el historiador beniano Guillermo Nogales Carvallo. Todavía hay huellas del periodo de apogeo, cuando el teatro se llenaba de gala con presentaciones de artistas traídos desde París.

Cachuela Esperanza también fue noticia en los últimos años por la intención del Gobierno de Evo Morales de retomar el proyecto hidroeléctrico de los ochenta, como parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Madera. Este propósito puso en máxima alerta a las poblaciones campesinas e indígenas.

En vista de que la subalcaldesa de Cachuela Esperanza, Lola Cáceres, prefiere hablar a nuestro retorno, nos apresuramos a contratar una embarcación. Subimos a un peque-peque disponible, un barco precario de navegación lenta. Su nombre se debe al sonido que provoca con su motor. Nos dirigimos a Riberalta surcando ríos en busca de las dragas en una isla que no conocemos.

Estamos a más de cuarenta grados de temperatura e invade la emoción de abarcar otra región geográfica. Decidimos navegar hacia arriba, es decir, ir

en contra de la corriente del río Beni Bajo. Luego de viajar varias horas, llegamos a la isla Oro Blanco. Ahí hay un campamento chino con maquinaria pesada que desmontó la franja ecológica. Al frente de la isla, en medio del río, ciudadanos chinos operan dos dragas.

A diferencia de los gigantes «dragones» chinos instalados en el río Kaka del norte de La Paz, esta maquinaria, operada también por personas de origen asiático, cuenta con dos infraestructuras conectadas entre sí, a una distancia aproximada de doscientos metros, por mangueras enormes que incorporan los barriles con el combustible subvencionado. Mientras tomo fotografías, los operarios nos filman y sacan fotos. Parece un duelo sobre el agua.

En Pando cerca de la isla está la comunidad Palmira, habitada por alrededor de cincuenta familias. En la orilla se encuentra el expresidente de la comunidad, un colono de nombre David «a secas». Él, según los datos proporcionados más tarde por el gerente de la Empresa Minera Río Dorado S.R.L., durante su gestión dio el visto bueno a la consulta previa, pero se rehúsa a dar una entrevista.

—Todo fue legal, la empresa Río Dorado tiene todo en orden y tiene derecho de asociarse con empresas chinas —responde como quien aprende un libreto del cual no puede salirse.

Al retornar me pregunto: «¿Cómo es posible que la comunidad de interculturales, de nombre Palmira, que se encuentra en el departamento de Pando dio permiso para que las dragas operen en el municipio del Beni?»

Llegamos de noche a Cachuela Esperanza y con las evidencias fuimos a la Subalcaldía. La subalcaldesa se sorprende al ver los videos de las dragas operando. Asegura que esta población jamás fue consultada y, por tanto, niega su consentimiento para que la empresa trabaje en la isla Oro Blanco.

—Sus videos me han puesto los pelos de punta porque esperábamos que llegue este señor de la empresa Río Dorado y nos explique. A nosotros nos



Draga china instalada a la orilla del río Kaka en el departamento de La Paz. (Foto: Jimena Mercado-ANF)

dijeron que los chinos van a estar seis meses y luego pondrán a la gente boliviana a trabajar. Estábamos esperando la consulta previa, pero estoy sabiendo que ya se hizo en una sola comunidad, en Palmira.

«La consulta previa, libre e informada y, sobre todo, de buena fe desde el Estado claramente no se cumplió», analizo. De pronto, interrumpe la conversación el esposo de la subalcadesa, el «bisnieto del varón de la goma». Aunque no funge como autoridad electa es una especie de emblema viviente de Cachuela Esperanza.

De larga barba blanca y ojos hundidos, Rafael Suárez es una autoridad simbólica local con peso propio, este lo lleva en el apellido. «Es bisnieto de Nicolás Suárez», lo presentan y eso es igual a decir: aquí está un familiar del fundador de Cachuela Esperanza, pues el terrateniente hizo historia en la región con el caucho y financió la Columna Porvenir que rescató Bahía

(ahora Cobija) del poder de los brasileños. Instruyó a Bruno Racua —un joven indígena de veintitrés años y el más experto en el manejo del arco y flecha— la misión de preparar a un grupo selecto de flecheros para enfrentar de forma sorpresiva al enemigo y así en 1902 se recuperó la «barraca de Bahía».

—La AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) es la única responsable de haber cometido este error, de haber sacado (de la consulta) a Cachuela Esperanza, también deberían venir a nosotros a preguntar — afirma el también fundador de la Unión Cívica Hijos de Cachuela Esperanza.

De pronto, recibe una llamada, se trata del empresario de Río Dorado S.R.L. que desde Santa Cruz solicita conversar conmigo. Me sorprende la rapidez con la que este se anotició de mi presencia y la investigación que hago. Tomo el celular y del otro lado escucho:

—Buenas noches, le habla el empresario Mauricio Ayala. Soy el gerente de la empresa Río Dorado. La invito a que venga por mi oficina en Santa Cruz y aquí le entregaré todos los documentos que están en regla y que demuestran la legalidad de las operaciones de las dragas.

—No puedo viajar a Santa Cruz porque mi vuelo está programado para mañana. Si usted quiere entregarme sus documentos puede ir a La Paz a las oficinas de la Agencia de Noticias Fides, que quedan en la zona de San Pedro.

—Perfecto, la visitaré a primera hora del lunes con mi asesor legal.

Me parece pretencioso el tono con el que me habló, pero sabía que si deseaba escribir la historia completa debía escuchar parte y contraparte.

La versión del empresario no es compartida por el presidente de Control Social Miguel Ángel García, que está en la oficina de la subalcaldesa. Deja en claro que la isla Oro Blanco pertenece a Cachuela Esperanza y asegura que la principal preocupación es la contaminación del medioambiente, ya que las comunidades aledañas viven de la pesca y caza.

El empresario y sus vínculos

Llega el día D y el empresario está en las oficinas de la Agencia de Noticias Fides (ANF) junto al senador de oposición de Santa Cruz, Pablo Klinsky, y al asesor de prensa de Unidad Demócrata (UD) del Senado. El legislador se apura a decir que no intervendrá en la entrevista y que su presencia en el medio solo responde a apoyo moral a su amigo de infancia. Afirma que Mauricio Ayala es un hombre honesto y trabajador. También pide no ser filmado.

—Mire, he llegado hasta La Paz para demostrar que todo está en regla. Como empresa tenemos la autorización para explotar por treinta años sobre 2.500 kilómetros del río Beni Bajo, con autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

A esta altura fue difícil imaginar la magnitud del territorio en juego ni el tiempo que durará la explotación del oro aluvial ni las estrategias con las que se dio curso a la mal denominada consulta previa. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera —según la patente minera 2003833 del año 2016— otorgó a la Empresa Minera Río Dorado S.R.L. la titularidad sobre ochenta cuadrículas que se encuentran en los municipios de Guayaramerín, Villa Nueva Loma Alta, de las provincias Federico Román y Vaca Díez, en Beni y Pando, respectivamente. En la precisión cartográfica se establece que el alcance involucra a San Antonio Centro Gomero y Cachuela Esperanza.

—¿Por qué por treinta años?

—Los treinta años los dio la Asamblea Legislativa. Antes los contratos transitorios con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) eran por cinco años, y ahora la Asamblea está dando por treinta años.

Inmediatamente justifica el contrato de largo plazo con el argumento de que en minería debe transcurrir mucho tiempo de exploración antes de que las empresas empiecen a explotar. Le pregunto si en algún momento explicaron a las poblaciones afectadas las consecuencias de esta actividad, como una forma de apropiación de los recursos naturales no renovables.

Ayala saca un documento membretado, como quien muestra la última carta debajo de la manga. Se lee: «Acta de acuerdo: licenciamiento social para autorizar la explotación minera a la Empresa Minera Río Dorado S.R.L.». El papel está firmado por la subalcaldesa Cáceres.

«Se permite a la empresa realizar el ingreso y labores mineras que correspondan y sean necesarias» con el compromiso de «beneficiar a toda la población que necesita de manera urgente, por la crisis que nos azota», estipula el documento escrito a mano alzada. Sin embargo, el manuscrito no reemplaza el proceso de consulta previa, libre e informada, pues esta debe ser realizada por el Estado a las poblaciones afectadas por la actividad minera, y, por tanto, contar con su consentimiento.

En ese punto, el empresario afirma que Cachuela Esperanza fue apartada de la consulta por determinación de un sociólogo, de quien no reveló su nombre y quien fue asignado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). Insiste en que la presencia de ciudadanos chinos es temporal, hasta capacitar a operarios locales.

—Ellos (pobladores de Cachuela Esperanza) quieren ser tomados en cuenta en la consulta, pero no tienen legalidad, porque de acuerdo a la información recogida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) son tierras fiscales. Mas yo hice compromisos con ellos para aportar con empleo y traer beneficios.

Además, asegura que la tecnología empleada para la exploración aurífera es «amigable con la naturaleza».

—Si es que vamos a tener algún requerimiento químico para la recuperación del metal obviamente vamos a pasar por las instancias pertinentes para que nos puedan autorizar y sea de uso totalmente responsable, pero no le puedo dar certeza.

Muy suelto de cuerpo admite que se deforestó sin permiso la franja ecológica para instalar en cinco hectáreas el campamento, por lo que optó por la «autodenuncia» ante la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).



Planchón colombiano con maquinaria pesada, instalado al ingreso del municipio de Teoponte sobre el río Kaka.

(Foto: Jimena Mercado-ANF)

—Vamos a reforestar incluso el triple. Ha sido una mala información que han tenido los comunarios de Palmira a los que contraté y a quienes se les pasó el plano y debían haber respetado los cincuenta metros del cordón ecológico del río al campamento, pero, lamentablemente, como andaban entre San Juan y Mendoza lo único que les interesaba era que se les pagara jornal.

Destaca que en Oro Blanco la empresa invirtió tres millones de dólares en cuatro dragas, que operarán en la zona.

—Tenemos como objetivo trabajar para que cada draga opere ocho mil metros cúbicos por hora.

El empresario resalta el compromiso social de la empresa con la región y su gente, mientras los pobladores no ocultan su miedo por lo que vaya a

sucedier. Después de conversar con Ayala queda claro que no solo oficialistas se beneficiaron de las componendas mineras auríferas, sino también los opositores. Son parte de los juegos de poder que se dan al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Dragas confiscadas

Una semana después del reportaje, el 4 de diciembre la AJAM informa que, en cercanías de la isla Oro Blanco del municipio de Cachuela Esperanza del departamento del Beni, personal de la Capitanía de Puerto Mayor Sócrates Vargas confiscó dos dragas chinas de última generación, instaladas en el río Beni. Con estas se explotaba de manera irregular oro aluvial.

La Armada Boliviana constató que las dragas empleadas para excavar material debajo del nivel del agua no contaban con el certificado de matrícula emitido por la Dirección General de la Capitanía de Puerto, así como el permiso de operación otorgado por la Unidad de Marina Mercante. Estos documentos permiten realizar actividades en los espacios acuáticos del Estado.

Durante la intervención, se encontró a dieciocho personas de nacionalidad china que trabajaban con la Empresa Río Dorado S.R.L. Debido a las irregularidades identificadas, los trabajos de explotación aurífera se paralizaron y se secuestró un remolcador que está en custodia de la Capitanía de Puerto Menor Cachuela Esperanza.

El reportaje «Dragas chinas llegan a Cachuela Esperanza de la mano de empresa para explotar oro por 30 años» fue publicado por la Agencia de Noticias Fides el 27 de noviembre de 2018 (<https://www.noticiasfides.com/economia/dragas-chinas-llegan-a-cachuela-esperanza-de-la-mano-de-empresa-para-explotar-oro-por-30-anos-393211>).

**ARCOPONGO:
SINÓNIMO DE AUSENCIA DE ESTADO
Y PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS**



**BIENVENIDOS
AL-PARAISO
CHAQUETY
LA-PLAZA**

Letrero del ingreso a la comunidad Chaquety, hoy afectada por la incursión de la actividad aurífera (Jimena Mercado-ANF)

ARCOPONGO: SINÓNIMO DE AUSENCIA DE ESTADO Y PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS

«¡Formen la guardia!».

Ordena el jefe del lugar y en cuestión de segundos la tensión sube y unos cuarenta hombres, algunos armados, nos rodean al senador y a mí que llegamos hasta la tranca improvisada del cantón Arcopongo para verificar la minería ilegal. Estos no dejan de mirarnos enojados. La mayoría es de piel morena, tiene los labios rajados y está transpirada por la humedad y la temperatura del clima semitropical. Casi de todos una mejilla está rellena por la coca masticada durante horas, práctica conocida como acullico.

«¿Cómo llegamos a este punto?», pienso sin retroceder un solo paso. La adrenalina se dispara. Soy consciente de que la situación puede descontrolarse. La comitiva que llegó hasta Arcopongo, al norte de La Paz, no pasa de ocho personas y estamos desarmadas.

Llegamos desde la ciudad de La Paz hasta este lugar en una vagoneta en la que vinimos dos periodistas, un *freelancer* de televisión, quien prefirió quedarse en el vehículo, y yo, de la Agencia de Noticias Fides (ANF); Yerko Núñez, senador de oposición y oriundo del municipio beniano de Rurrenabaque, y el conductor. Después se nos unió una camioneta donde están ocultos cuatro comunarios, tres hombres y una mujer, de la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri II. Esta reclama cincuenta cuadrículas mineras

que estaban en trámite para la otorgación de derecho para la explotación aurífera, y hoy están en manos de explotadores ilegales, un grupo de cooperativas que prefirió hacerse del área a la fuerza.

Son más de las cinco de la tarde de un día de mayo de 2018. Estamos en las puertas de Arcopongo en la provincia Inquisivi, al noreste de La Paz, a casi doce horas de viaje por caminos accidentados desde la sede de gobierno. Para llegar a este monte salimos de la ciudad en la madrugada, recorrimos más de 250 kilómetros y pasamos por caminos de tierra accidentados hasta llegar al municipio cocalero de La Asunta.

En este lugar surgieron dirigentes rebeldes que señalan a Evo Morales, presidente de Bolivia y de las seis federaciones cocaleras de Chapare, de tratarlos como «cocaleros de segunda», siendo que cultivan la milenaria hoja en zonas tradicionales. Los problemas siguen irresueltos por pugnas internas de poder político y por el control del comercio de la coca.

Apenas hace unos minutos pretendíamos ingresar al área de explotación aurífera. Para ello, con el senador mostramos nuestras credenciales. Estas no pudieron mover las cadenas que impiden avanzar por el camino de tierra, y aunque evitan nuestro paso no pueden tapar el desastre ambiental ocasionado en el área.

Desde donde estamos, una zona alta donde se deforestó y aplanó cientos de metros para montar el improvisado campamento, se observan más de veinte maquinarias de alto tonelaje en operación. Estas retroexcavadoras, tractores, palas, entre otros, fueron empleados por los explotadores para desviar el río Chaketi, que está a unos quinientos metros de distancia desde donde nos encontramos. Desmontaron bosques e intimidaron a las comunidades para extraer el metal dorado.

—¿Qué permiso necesito si es tierra fiscal? —reclama el senador Núñez¹—. Yo te estoy presentando mi credencial de autoridad electa, pero vos me estás vulnerando mi derecho de poder ingresar a un área para fiscalizar lo que

1 Yerko Núñez fue ministro de la Presidencia del Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020) y luego en el Gobierno de Luis Arce se declaró en clandestinidad.



Explotadores ilegales de oro instalados en el cantón Arcopongo. (Foto: Jimena Mercado-ANF)

me faculta la Constitución Política del Estado. Si me demuestras que es propiedad privada, no insisto.

—Aquí mandan los jefes de grupo. Llámenlos —dice con autoridad quien parece ser el capataz del lugar.

Cinco hombres desconfiados hablan entre sí y uno afirma:

—El jefe de La Paz tiene que dar la orden.

—¿Y quién es el jefe de La Paz? —pregunta Núñez.

El silencio se apodera. Prefieren no responder. Solo podemos especular. ¿Será el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Minederas o el ministro de Minería, César Navarro? ¿O el director de la Au-

toridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erik Aríñez? Las interrogantes se quedan flotando en el aire.

Activo la cámara de video de mi celular y filmó por centésimas de segundos, pero uno de los guardias mineros trata de arrebatarme el equipo.

—No se puede filmar nada —me increpa.

Defiendo mi derecho al registro y evito que me lo quite, sin embargo, sé que si vuelvo a sacar el celular no tendré la misma suerte. La decisión ya está cantada: no dejar pasar a nadie. De pedir ingresar pasamos a un momento de alta tensión cuando los explotadores advierten que son filmados desde la vagoneta por el colega periodista. Los roles cambian, los «cooperativistas» empiezan a filmarnos y amenazarnos de manera intimidante. «¿Si todo fuera legal como dicen los cooperativistas, por qué tanto celo y desconfianza?», me pregunto.

Arcopongo hace algunos años está fuera de la legalidad. Se convirtió en un territorio de nadie, donde el Estado parece haber cedido el control a grupos afines a la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS). Precisamente, las cooperativas que tomaron a la fuerza las cuadrículas fiscales forman parte de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomín), aliada del Gobierno.

El conflicto sobre esta área fiscal se inició en 2012, cuando cooperativas mineras afiliadas a Fedecomín, sin autorización ni derecho minero otorgado por la AJAM, iniciaron la explotación de oro a gran escala en una superficie de cincuenta cuadrículas, equivalente a 1.250 hectáreas. Por ello, los comunarios de la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri II reclamaron. Si bien estos tampoco tienen derecho minero otorgado por el Estado, exigen un derecho preferente, debido a que sus trámites están en curso e incluso fueron aprobados por el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin²). Sus pedidos no fueron atendidos.

Ese mismo año, la cooperativa pidió autorización a Sergeotecmin para la explotación minera en una superficie de cincuenta cuadrículas que se ex-

2 Después de 2014 pasó a llamarse Servicio Geológico Minero (Sergeomin).

tiende a lo largo del río Chaquety, ubicado en el municipio de Inquisivi de La Paz. En 2013 el servicio geológico, en la Gaceta Oficial Minera 181, publicó que Ullakaya Condoriri II cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa para tramitar su autorización, entre otros aspectos, porque técnicamente el área fiscal solicitado para la explotación aurífera no presentaba sobreposición sobre territorios indígenas, áreas protegidas o propiedades particulares. Sin embargo, los comunarios del lugar anoticiados por la veta minera generaron conflictos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) determinó inmovilizar el área. Esta decisión fue aprovechada por los cooperativistas de Fedecomín.

Tras media hora de negociación y pese a que el senador insiste y recuerda que recorrió más de doscientos kilómetros desde La Paz, los explotadores se niegan a abrir el paso para que él, acompañado por periodistas, ingrese a inspeccionar. El representante de la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri II, Francisco Eugenio, convenció a Núñez para ir a esta región a verificar las ilegalidades.

Por suerte, la camioneta en la que los comunarios del bando contrario están ocultos bajo un techo de hule no fue revisada, porque la situación se hubiese complicado aún más. Tres hombres y una mujer se escondieron para convencerse en qué condiciones están las áreas mineras que solicitaron.

Entonces, empieza una operación peligrosa: la retirada. Por estos caminos angostos solo se puede salir de retro hasta encontrar un espacio para girar. Son segundos decisivos: o nos vamos sin hacer más bulla o terminamos rodeados por este grupo irregular. Núñez es el último en entrar a la vagoneta, luego de expresar su indignación. Le pedimos que se calme, pues las personas que evitan nuestro ingreso nos superan en número y están armadas.

A pesar de estar ubicado en un punto remoto de las montañas andinas, Arcopongo ganó notoriedad nacional por la presencia de grupos armados al servicio de la explotación ilegal de oro y varios enfrentamientos armados con muertos de por medio a causa del control del metal precioso, tal como el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) lo re-

gistra en su estudio *Arcopongo, la actual política minera alienta los conflictos armados*³.

En este punto de la geografía —en puertas del área fiscal minera de Arco-pongo—, donde la mirada no permite alcanzar las cincuenta cuadrículas mineras explotadas de manera ilegal y tomadas a la fuerza por cooperativas mineras afines al MAS, trato de dimensionar el impacto socioambiental provocado por la explotación ilegal de oro, seguida de otras actividades ilícitas.

Detrás de la explotación ilegal de oro se evidencia la conformación de grupos armados y la comercialización ilegal de este metal que en algún momento también se vincula con el narcotráfico —tal como relatan varios comunarios que prefieren no dar su nombre para precautelar su vida—.

Desde el sinuoso camino en la cornisa de la montaña se observan enormes espacios de bosque devastado, parecen cicatrices en medio de la densa vegetación.

Está claro que, bajo el rótulo de «cooperativas», grandes capitales mueven maquinaria pesada para la explotación de oro a gran escala mediante el uso de combustible subvencionado y sin licencia ambiental, desmontan sin límite, crean milicias armadas al margen de la ley y compran conciencias de quienes están en el Estado para controlar la actividad minera.

De retorno a La Paz, el legislador comenta que envió una conminatoria al ministro de Minería, César Navarro, para que explique qué tipo de actores mineros operan en las áreas inmovilizadas de Arco-pongo y qué acciones legales activó desde su despacho en contra de los explotadores ilegales, pero no obtuvo respuesta.

Durante el largo viaje reviso mis apuntes. El representante de la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri II, que visitó la sala de redacción de ANF en la zona de San Pedro, aseguró que detrás de la toma ilegal de las áreas

3 Esta investigación hace referencia a los conflictos de 2012 y señala: «El uso de armamento militar en los enfrentamientos entre cooperativistas muestra además el descontrol y la completa ausencia de autoridad que represente los intereses del Estado en las zonas mineras del oro».



Maquinaria pesada en operaciones auríferas a orillas del río Chaketi en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz. (Foto: Cooperativa Ullakaya Condoriri)

fiscales están las cooperativas Villa Santiago, Crestón, Chaquety Plaza, Elena Pampa, Río Chaquety y Palma Flor.

Fedecomín confirmó que quienes explotan en Arcopongo son sus afiliados, pero están en proceso de «regularización». Sin embargo, desde el 2017, a través de varios informes, el Gobierno niega que se hayan identificado derechos a favor de César Eván Silvestre Castillo y Paulino Cachi Mamani, representantes de las cooperativas Palma Flor y Elena Pampa, respectivamente. Tampoco hay registros de venta a nombre de estas personas en el Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras (Sinacom). Es más, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) dijo que las dos cooperativas carecen de licencia ambiental para la explotación de oro y otros minerales.

Son las dos de la madrugada y nos acercamos a La Cumbre de retorno a La Paz, para calentarme llevo las piernas hacia mi pecho. El frío penetra mis huesos y empiezo a tiritar. Llegamos a las cuatro de la mañana al estadio Hernando Siles de Miraflores, punto de partida en el que nos citamos un día antes para ir a Arcopongo, un encuentro que casi nos costó la vida.

Vuelve a correr sangre

Tras la inspección legislativa fallida, el retorno a La Paz y la publicación del reportaje, los extremos denunciados no fueron desmentidos por la AJAM, que se limitó a decir que «las denuncias de explotación minera se encuentran en etapa de investigación por parte del Ministerio Público».

A tres semanas del ingreso a Arcopongo, la zona es otra vez escenario de nuevos enfrentamientos. Son las dos de la tarde del 11 de julio y el representante de la cooperativa Ullakaya Condoriri II me llama por celular para darme una mala noticia: un enfrentamiento con los mineros ilegales terminó con la vida de un comunario, uno de los suyos, y varios resultaron heridos.

—Hermana, lo tenían todo planificado, nos esperaron a balas. Ni podemos acercarnos al lugar. Uno de los nuestros murió y hay muchos heridos —me dice con la voz entrecortada.

Todavía afectado cuenta lo sucedido:

—De todo esto tiene la culpa el ministro Navarro y la AJAM, porque les hemos insistido en que solucionen este tema, hemos andado años buscando justicia, pero han preferido ponerse del lado de los avasalladores. Esta vez los mismos pobladores de Inquisivi se han levantado porque exigen regalías y la minería ilegal no deja ni un peso.

Después de hablar con Francisco, recién comprendo la llamada que recibí por la mañana de un número desconocido. Una mujer inquirió: «¿Usted es la periodista que vino a Arcopongo? ¿Entrará con los comunarios esta tarde?». No entendí de qué hablaba en ese momento y rápidamente le con-

sulté quién era, pero colgó. Me fue difícil imaginar qué había detrás de su llamada y que nuevamente correría sangre a orillas del río Chaquety.

La situación es mucho más compleja. Francisco dice que el alcalde del municipio de Inquisivi, Mario Sarzuri, es el autor de los presuntos delitos de asesinato, lesiones gravísimas y tenencia y porte de armas en el conflicto del 11 de julio. No hay sentencia en su contra.

Un día después del hecho, busco al ministro de Minería, César Navarro, para preguntarle sobre lo ocurrido en Arcopongo. Corro detrás de él a la salida de una reunión del gabinete de ministros, en el palacio de gobierno, ubicado en el centro pajeño.

—¿Qué está haciendo el Gobierno para detener la violencia en Arcopongo, de donde sale el oro de manera ilegal y no deja regalías para el departamento de La Paz? —le pregunto en plena calle.

—No es así, estamos en una fase de saneamiento y evidentemente en muchos lugares hay actividad productiva minera ilegal, pero también las comunidades han asumido como un hecho de propiedad absoluta para la actividad productiva y ese es un hecho muy negativo para la formalización —responde algo nervioso pero convencido de que debe hablar del tema.

La autoridad de origen potosino, departamento minero por tradición, justifica la inacción del Estado con el argumento de que la actividad minera de Arcopongo está en fase de «formalización de contratos» y lamenta que haya comunarios que estén asumiendo como titulares de áreas mineras.

En la lectura de Navarro⁴, las comercializadoras actúan como agentes de retención de impuestos, para luego exportar el metal precioso.

—Dejan regalías porque las regalías se pagan por el valor bruto de producción.

—¿Quiénes son los agentes de retención de las regalías?

4 Tras la crisis poselectoral de 2019, Navarro salió del país, junto con el exviceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Damián Dorado, señalado por promover los avasallamientos de tierras e incendios forestales en la Chiquitanía.

—Las comercializadoras compran y exportan a mercados externos, por lo tanto, sí dejan regalías —responde ante el asombro de los periodistas reunidos a su alrededor.

Según sus datos, las cooperativas legalmente constituidas en La Paz son 1.400, pero en los hechos los actores mineros superan los 1.800.

Días después del hecho, unos treinta mineros ilegales también frenaron el paso de un equipo técnico de la Gobernación de La Paz, que fue a inspeccionar el área del río Chaquety. Nuevamente la justificación fue que hay órdenes superiores para no dejar pasar a ninguna comisión.

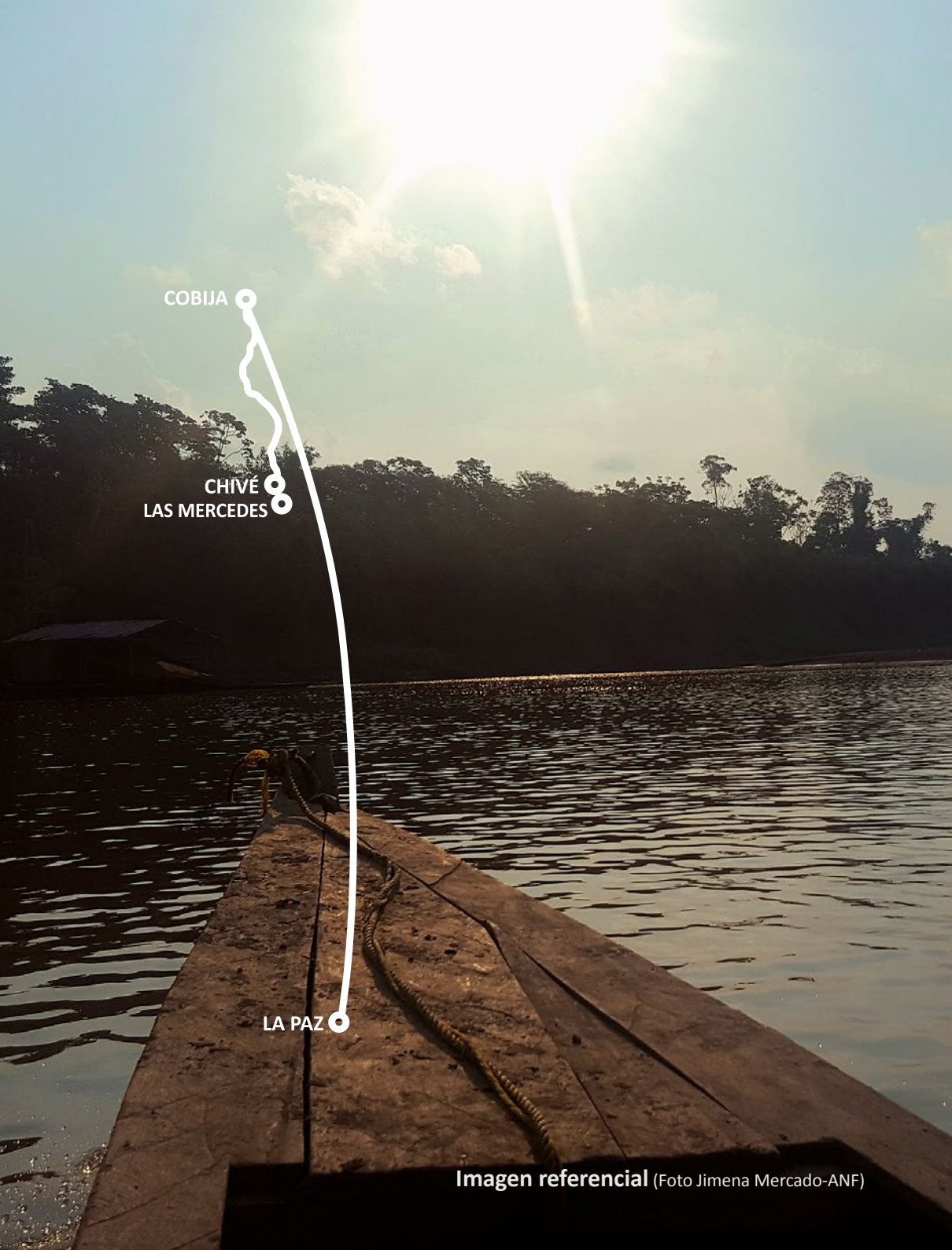
«Controlaban el ingreso y salida de cualquier movilidad; era una tranca donde aproximadamente treinta personas obstaculizaron el paso de la comisión de técnicos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que tenía la misión de realizar la inspección a las supuestas cooperativas asentadas en el trayecto del río Chaquety», señala el informe del encargado de Fiscalización de la Dirección de Salud Ambiental y Caminos Climáticos, Juan Gutiérrez.

Similar situación a la que vivimos enfrentó la comisión departamental. Su informe acota: «Cuando se les dio a conocer del trabajo que íbamos a realizar, las personas parapetadas en la tranca rústica no quisieron entender, ni mucho menos darnos el paso respectivo, argumentando que tenían órdenes superiores de no dejar pasar a ninguna comisión, mucho menos que sea del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz».

Entretanto, los mineros armados continúan con la explotación de oro, contaminan las tierras amazónicas del norte paceño e impiden que el Estado regule su actividad.

El reportaje «Ausencia del Estado en Arcopongo deriva en explotación ilegal del oro a gran escala» fue publicado por Agencia de Noticias Fides el 8 de mayo de 2018 (<https://www.noticiasfides.com/economia/ausencia-del-estado-en-arco-pongo-deriva-en-explotacion-ilegal-del-oro-a-gran-escala-387838>).

LOS TACANA SE CONVIERTEN EN MINEROS



COBIJA

CHIVÉ
LAS MERCEDES

LA PAZ

Imagen referencial (Foto Jimena Mercado-ANF)

LOS TACANA SE CONVIERTEN EN MINEROS

Las voces de la selva me vuelven a llamar y no puedo resistirme, menos aún de volver a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacanas II —situada en la provincia Abel Iturralde, al norte del departamento de La Paz, colindante con Pando y cerca de la frontera con Perú—.

El ingreso a la comunidad Las Mercedes en 2017, por el río Madre de Dios, marcó mi conexión con los pueblos indígenas de la Amazonía de manera definitiva. Todavía conservo en la memoria el rostro de Moisés, hijo pequeño del vicepresidente de los Tacanas, Edgar García, cuando estaba al frente del deslizador. La embarcación iba repleta de víveres, familias y mujeres con bebés en brazos.

Era época seca y el nivel del agua descendió tanto que obligó a los hombres a brincar al río y empujar el transporte fluvial en el último tramo. Entre esos recordaré siempre a Ádamo Diego, excoordinador de los monitores socioambientales. Él, firme en sus convicciones, alertó sobre la afectación al pueblo en aislamiento voluntario, probablemente toromona, por la presencia de la empresa china BGP, contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para las tareas de exploración sísmica.

Precisamente ese trabajo de investigación me abrió los ojos acerca de la vulnerabilidad en la que se encontraban los pueblos indígenas frente a un Estado que negó la existencia del pueblo no contactado y exigió verlo para reconocerlo. Mi reportaje «Gritos desde la Amazonía alertan de un posible etnocidio: tras los pasos del pueblo no contactado» retomó el tema de una agenda olvidada.

A dos años de la publicación del artículo, vuelvo a ingresar al mismo territorio, esta vez para verificar las actividades mineras. Como en las anteriores ocasiones, viajo sin prejuicios, con el deseo de sorprenderme ante la realidad y dispuesta a escuchar y no juzgar. Para llegar hasta Chivé, comunidad sobre el río Madre de Dios, tomé un vuelo de La Paz a Cobija, departamento de Pando. Luego viajé por casi cinco horas en un carro cuatro por cuatro que contraté en la capital pandina.

Son las primeras horas de la tarde de un jueves de septiembre de 2019 y en la cancha de Chivé estoy con el vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD), Hermán Bascopé. Este sugiere que compremos un turril de gasolina para asegurar la travesía que haremos, además de aceite para el motor.

En esta zona el combustible es un producto no solo de primera necesidad, sino uno de los más caros porque no hay una sola gasolinera cercana ni distribuidora de la estatal YPF. Las dueñas de las pensiones y tiendas aprovechan esta situación y lo revenden hasta en cuatrocientos por ciento más de su precio real.

Trasladar el turril hasta el deslizador que flota sobre el río Madre de Dios, atracado en las orillas de Chivé, toma más de una hora. Varios hombres participan en la faena: primero, para hacer rodar el turril por la cancha de extremo a extremo y luego, para conectar una enorme manguera de más de cien metros desde una suerte de acantilado hasta la embarcación.

Estamos listos para viajar y con la gasolina y el aceite suficientes. Navegamos por el imponente Madre de Dios, uno de los mayores afluentes de la Amazonía que atraviesa Perú y Bolivia. El sentimiento que despierta estar

en medio de esta inmensidad llena de naturaleza es de pura libertad. En tiempo lluvioso el nivel del río crece tanto que es imposible ver las orillas, pareciera que estás navegando por el mismísimo Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo, que tiene más agua que el Nilo, el Yangtsé y el Misisipi juntos.

Mientras navegamos, Hermán cuenta que las comunidades Puerto Pérez, Toromonas, El Tigre y Las Mercedes del territorio Tacanas II fueron sujetas a una compensación económica de tres millones de bolivianos a causa de los impactos socioambientales provocados por el Proyecto de Exploración Hidrocarburífera Sísmica 2D Cuenca Madre de Dios, Área Nueva Esperanza. Dice que los recursos serán empleados para potenciar la producción de castaña. La pelea duró varios años y significó un permanente reclamo en las oficinas estatales, además de recursos legales.

En medio de la selva amazónica unas precarias balsas navegan en el Madre de Dios. Allí van indígenas tacanas que dejaron la selva para convertirse en mineros. Así, dicen, defienden el bosque del avance de gigantes dragas chinas que llegaron a Cachuela Esperanza, a unos cuatrocientos kilómetros, de la mano de una empresa privada y el consentimiento de la Gobernación de Beni.

Llegamos en la noche a la comunidad Las Mercedes. Al día siguiente, tenemos previsto hacer una larga travesía hasta Puerto Heath, en la frontera con Perú. La aldea que está en medio de la selva cobija a más de cincuenta familias, dedicadas a la recolección de la castaña —principal actividad de los tacanas— y ahora también a la minería. Está a treinta kilómetros del cantón Chivé, que a su vez forma parte de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi de Pando.

Me alojo en la vivienda del vicepresidente tacana. La calidez de su numerosa familia me hace sentir en casa. La cabaña, de madera y techo de jatata, similar a los palafitos, está construida a un metro de altura del suelo y ofrece comodidad a quien viaja. Comparto un dormitorio con una de sus hijas. La cama está protegida por un mosquitero tipo tienda de campaña

que cuelga del techo. En estas zonas el mosquitero cubre-cama aísla a bichos y hasta a tarántulas.

Al día siguiente, después de desayunar y conversar con el vicepresidente del pueblo tacana vamos a la orilla del río. Entramos al deslizador. Saludamos al balsero, a su asistente, al presidente de la Central de Comunidades Indígenas Tacanas II del Río Madre de Dios, Rolando Justiniano, y al dirigente de Recursos Naturales de los tacanas, Rolando Salvatierra.

Mientras navegamos buscamos detectar alguna actividad minera. A lo lejos divisamos una larga fila de pequeñas dragas auríferas que operan a unos cincuenta metros de la orilla. A unos metros se observan precarias embarcaciones que suelen ser de los operarios.

—Si me dieran a elegir entre las balsas auríferas, en las que están trabajando nuestros hermanos, y esas enormes dragas chinas, prefiero quedarme con las balsas, porque estamos hablando de explotar el oro de manera racional —dice Justiniano, que está sentado al borde del deslizador y mira hacia el horizonte.

Explica que la amenaza de las dragas chinas de extenderse por el río Madre de Dios impulsó a los tacanas —tradicionalmente recolectores, cazadores y pescadores— a involucrarse en la actividad aurífera en busca de sustento para sus familias, defender su territorio y preservar la selva de la destrucción.

El dirigente —quien se acomoda en el asiento lateral del deslizador —teme que solo sea cuestión de tiempo que la amenaza llegue hasta el Madre de Dios, como ocurrió en los ríos del norte de La Paz. Allí la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) otorgó derechos mineros a cooperativas y actores privados, que a su vez delegan la explotación de oro a empresas chinas.

—Se están dando en concesiones todas las riberas del Madre de Dios para los chinos. Lo hemos visto en la Amazonía de Colombia, de Perú y ahora en el norte de La Paz. Nos han informado que hay dos «dragones» con mayor potencia destructiva que están siendo preparados, es una amenaza.



Pescador indígena tacana a orillas del río Madre de Dios se queja por el uso del mercurio en la extracción del oro que contamina los peces. (Foto: Jimena Mercado-ANF)

De acuerdo con la Ley Minera 535, ya no hay concesiones mineras, sino derechos mineros otorgados por la AJAM. Las anteriores concesiones, denominadas «derechos preconstituidos», siguen en proceso de adecuación. En tanto que las cooperativas están prohibidas de asociarse con capitales privados extranjeros o nacionales.

Justiniano lamenta que las instituciones del Estado, como la AJAM y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), den curso a permisos para la explotación aurífera y desmontes a favor de capitales extranjeros en complicidad con nacionales.

—El Estado nos está mintiendo. De balde tenemos estas entidades que deben reglamentar, porque las normativas establecen que no se debe destruir el medioambiente y la naturaleza.

Mientras hablamos, el sol comienza a trepar por encima de la selva densa. Aumenta la humedad y mi cuerpo agradece la brisa. Por el ruido del motor y la corriente del agua alzamos la voz, pero no hay nada mejor que conversar así, mirando lo que nos rodea; es una forma de liberar el alma.

El líder indígena sabe que la incursión en las actividades extractivistas hoy les pasa factura a los tacanas, a quienes se les cuestiona por contradecir su tradicional estilo de vida, pues deben usar mercurio para extraer el preciado metal.

—A veces alguien dice que hay una contradicción entre los propios indígenas sobre nuestro accionar en la vida cotidiana porque si conservamos el bosque, ¿cómo es que hacemos minería? Pero no todos los indígenas hacemos (minería), algunos hermanos están obligados, porque el Estado no nos atiende. Otros hermanos siguen con la recolección, caza y pesca.

La Tierra Comunitaria de Origen Tacanas II cuenta con cuatro comunidades: Puerto Pérez, Las Mercedes, Toromonas y El Tigre. A pesar de sus gestiones por más de diez años, no logró la titulación colectiva de su territorio por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Ello la hace más vulnerable.

La TCO Tacana II es asediada por el proyecto de perforación hidrocarbúrfica en el bloque Nueva Esperanza, la explotación aurífera a gran escala, los avasallamientos de colonos y un proyecto carretero que se sobrepondría a su territorio.

—Vamos a empezar a hacer defensa de nuestra Amazonía, no hay que olvidar que en la reserva de toromonas están los hermanos no contactados; hay pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Es terrible el impacto que provocará en ellos —alerta Justiniano.

Los tacanas piensan que si las dragas chinas llegan a esta zona, los recursos naturales, como el río y la gran selva con toda su biodiversidad, serán devastados en pocos años. Así ocurre en la región peruana del Madre de Dios, cerca de este lugar, donde la minería dejó cicatrices tan grandes que

pueden ser vistas desde el espacio a través de las cámaras de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU (NASA).

Sin ir lejos, en los ríos Kaka y Beni, en el norte de La Paz, y en el río Beni Bajo, en el departamento del mismo nombre, a kilómetros se puede distinguir la devastación en las orillas, el desmonte desenfrenado y las toneladas de piedras que fueron extraídas desde el fondo del agua están acumuladas en las riberas. Las heridas en la Amazonía son irreversibles.

Navegamos por Puerto Tigre, Toromonas, Puerto Pérez hasta llegar a Puerto Heath, donde la Armada Boliviana tiene su puesto de control. No vimos una sola draga china. La actividad aurífera está en manos de los balseros indígenas. Ya en Chivé, para tener mayor información sobre la actividad minera, converso con el representante legal y socio de la cooperativa aurífera Asociación de Balseros (Asobal) en Pando, René Armando Patzi, quien está en su tienda.

De carácter abierto y dispuesto a hablar, explica que al momento 540 balsas auríferas están desplazadas a largo del río Madre de Dios, desde Puerto Heath, en la frontera con Perú, hasta Tiburón III, y aguas abajo de Riberalta en el río Beni del departamento del mismo nombre.

Rebobino en mi memoria las imágenes de la incursión que anteriormente hice a Cachuela Esperanza y Riberalta. Desconocía que fueran tantas balsas, pero no suena incoherente si se considera las largas distancias y que cada veinte a treinta minutos nos topamos con estas embarcaciones, que estaban formadas en filas. Estas pertenecen a 180 socios; en promedio tienen tres unidades extractivas.

En cada balsa se estima que operan seis personas, es decir, 3.240 empleos directos, destaca Patzi y dice que esa cifra no toma en cuenta el trabajo indirecto, como los servicios de cocineras, soldados, motoristas, entre otros.

—El momento en que el Gobierno diga: «Ustedes no van a trabajar más en el río», no sé a dónde va a ir toda esa gente, porque los chinos no contratan

a ningún boliviano, solo lo tienen al palo blanco —dice sobre el titular del área minera.

Con asiento en el cantón Chivé, advierte que si las dragas chinas llegan al río Madre de Dios los balseros las quemarán como ocurrió el 2002 con unas dragas brasileñas que se instalaron en ese lugar.

—¿Cuál es la diferencia entre la draga y la balsa? —pregunto.

—Es una controversia y una equivocación que siempre han tenido las autoridades que han venido.

Cual experto en su área, explica que una balsa es una embarcación artesanal fabricada con madera, cuenta con una manguera de succión de seis pulgadas y un motor de sesenta caballos de fuerza. En cambio, la draga pesa muchas toneladas, está hecha de metal, tiene un motor de doscientos a trescientos caballos de fuerza y la circunferencia de la manguera es de doce a dieciocho pulgadas.

Mientras Patzi aplasta a los mosquitos que se le posan en los brazos, dice que las balsas deben ubicarse entre veinte y cincuenta metros de la orilla del río para no provocar daños y las dragas, a más de cien metros de la ribera, porque el impacto que generan alcanza hasta dos kilómetros a la redonda. Incluso pueden ocasionar el desborde de los ríos y el deslizamiento del monte.

—Ya hubo una experiencia en Riberalta en una comunidad que dejaron que trabajen las dragas brasileñas a cambio de un porcentaje o beneficio económico. Trabajaron a 100 metros de la orilla y en menos de una semana todo su chaco de plátano desapareció.

—¿Entonces ustedes comprobaron lo destructiva que puede ser esta tecnología y apostaron por la extracción tradicional?

—Mi padre ya tiene 60 años, yo soy de la segunda generación y sigo trabajando, tal vez mi hijo seguirá trabajando, pero no lo vamos a acabar todo de golpe, como hacen esas maquinarias.

—¿Y se ha relajado la entrada de extranjeros en actividades auríferas?



Fila de balsas auríferas sobre el río Madre de Dios que operan bajo el control de ASOBAL. (Foto: Jimena Mercado-ANF)

—No sé con qué documentación están entrando estos chinos, brasileños, colombianos, ¿bajo qué protección? —cuestiona—. Después de la zafra de castaña, mucha gente se va a la minería, viven de eso, comen de eso.

Cada familia obtiene aproximadamente cinco mil dólares por la cosecha y venta de castaña, mientras que por el trabajo en la minería entre setecientos y mil bolivianos por semana.

Monopolio

Luego de conversar con el representante de Asobal, el secretario de Recursos Naturales de los tacanas apunta a esa entidad por monopolizar la actividad aurífera en esta región.

—Son los grandes empresarios que están en los ríos; esas cooperativas están conformadas sobre todo por grandes empresarios.

Vestido con una chaqueta de color naranja fosforescente, con las siglas de la china BGP, Salvatierra también fue monitor socioambiental en representación de la organización indígena en el proyecto de sísmica 2D, que en 2016 se centró en la búsqueda de hidrocarburos.

—Son monopolios, el ministro (de Minería) no ha permitido que las comunidades indígenas conformen cooperativas con el fin de garantizar su sustento familiar, pero los otros han pagado a las comunidades y están operando.

Lamenta que algunos comunarios se «hagan utilizar» por los grandes empresarios para explotar en sus comunidades. Incluso dice que las balsas operan fuera de sus cuadrículas y, por tanto, incurren en la explotación ilegal de oro.

En 2003 el Estado boliviano se comprometió a cumplir el Convenio de Minamata para reducir el uso de mercurio, pero en los últimos cinco años su importación creció veinte veces. El dirigente de la Subcentral del Cantón Chivé, Jorge Luis Naira Guzmán, asegura que, a pesar de que esta zona es parte de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, jamás vio al personal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua tomar muestras del río para determinar si hay o no contaminación.

—En cuanto a la contaminación de mercurio, la Gobernación ni las autoridades departamentales ni nacionales están viendo esa socialización. Tengo entendido que ya hay peces que están contaminados. Como comunidad no contamos con recursos para llevar adelante estudios que son muy importantes sobre el mercurio.

Sobre las dragas chinas afirma que «gracias a Dios no llegaron al Madre de Dios». Acota que Asobal coordina con las comunidades para evitar su arribo a Pando. Por su parte, el subalcalde de Chivé, Ángel Amburó Gonzales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), asegura que entre los balseros se controlan el uso de mercurio y también se denuncian.

—Dos veces ha pasado que han tumbado bosque y se denunciaron. En lo que más se cuidan es que no haya derrames.

Considera una incoherencia que el Estado facilite las operaciones chinas auríferas y prohíba a las comunidades a organizarse como cooperativas.

—Si nos están prohibiendo, ¿cómo van a entrar las dragas chinas? La población está un poco olvidada y solo con la recolección de castaña nos sustentamos, y cuando pasa la zafra mucha gente se va a la minería.

Menciona que hace unas semanas en un operativo de la Armada y la AJAM se aprehendió a treinta personas, entre las cuales había indígenas.

—Hubo bloqueo y no se permitió que se llevaran a hermanos, a vivientes de la región.

Así los propios indígenas estuvieron expuestos a detenciones por involucrarse en actividades mineras. Las amenazas en torno a la minería aurífera sobre el Madre de Dios y sus poblaciones aledañas no solo se traducen en las dragas chinas, sino también en las propias balsas cooperativizadas, ahora también desde el Estado.

El viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Víctor Flores, anunció que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se encargará del proyecto aurífero sobre el río Madre de Dios, una vez que cuente con información de prospección y exploración del Servicio Geológico Minero (Sergeomin).

Con el cambio de los patrones de producción en la Amazonía, es importante mirar más a lo que sucede en las comunidades indígenas. Estas hoy en día son presionadas a tal punto por el extractivismo que si no son absorbidas por este sistema depredador desaparecerán.

Debo volver a La Paz y quizás si miro atrás me convierta en sal, no porque el pueblo tacana haya pecado, sino porque en medio de tantas contradicciones y luchas de conciencia y de clase se dieron cuenta de que el oro se vuelve polvo entre sus dedos, mientras las dragas extranjeras succionan hasta el último gramo que brilla bajo el agua.

¿Acaso aquí se terminan los ideales en defensa de la naturaleza?, no. Es solo una escena más que nos invita a reflexionar sobre cada realidad, cada imagen, cada palabra... Todo tiene un significado, una causa y un efecto.

El reportaje «Tacas se convierten en mineros para detener el avance chino en el río Madre de Dios» fue publicado por la Agencia de Noticias Fides el 28 de septiembre de 2019 (<https://www.noticiasfides.com/economia/tacas-se-convierten-en-mineros-para-detener-el-avance-chino-en-el-rio-madre-de-dios-401135>).

EMPRESA CHINA DIVIDE AL PUEBLO MOSETÉN



MUCHANE

INICUA

PALOS BLANCOS

CARANAVI

LA PAZ

Imagen referencial (Foto Jimena Mercado-ANF)

EMPRESA CHINA DIVIDE AL PUEBLO MOSETÉN

La pandemia del nuevo coronavirus puso de rodillas al mundo y obligó a la gente a encerrarse. Pero para muchos significó una oportunidad para expandir sus intereses de lucro aprovechando el silencio, por ejemplo, para las empresas chinas.

Un despacho informativo de Radio Tropical desde Palos Blancos a la cadena Erbol me alertó sobre los afanes auríferos de la presencia china en esa zona. Por eso, decidí ingresar a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Mositén en las tierras bajas del departamento de La Paz.

Es marzo de 2021 y todavía llueve en la zona de Los Yungas y tierras bajas de La Paz. Ha sido un año particularmente lluvioso, pero no puedo esperar más tiempo, además, «el clima es tan variable que también habrá días soleados», me digo a modo de consuelo. Otra amenaza que enfrenta la realización del reportaje es un conflicto cocalero, que derivó en bloqueos esporádicos en puntos neurálgicos de la carretera, como Unduavi y Yolositá. Incluso hubo enfrentamientos con detenciones y heridos.

Viajaré en un Ipsum para siete pasajeros, desde la terminal Minasa en La Paz a Caranavi, después del almuerzo de domingo, porque es poco probable que haya bloqueos el fin de semana. Ya no pretendo repetir la experien-

cia de viajar a aquellas tierras en estos vehículos de transporte público en la noche.

Una vez en Caranavi, busco donde tomar un buen café del lugar, siendo que este municipio es la capital cafetalera de Los Yungas y Bolivia. Fue fácil encontrar ofertas. Hago un rastreo rápido y hallo una cafetería que lleva el mismo nombre del municipio de paso. Mientras degusto esta delicia con un pastel de yuca, un tubérculo del lugar, observo que hay poco movimiento en el pueblo y pienso en que debo buscar un hostel económico para descansar, pues los gastos mayores serán en el alquiler de transporte terrestre y fluvial, una vez que llegue a Palos Blancos.

Camino por una calle bastante amplia y llena de hostales para todo bolsillo; la encuentro parecida a esas calles caóticas llenas de gente de la ciudad de El Alto. De hecho, Caranavi, por más de ser conocida como la puerta a la Amazonía, casi arrasó con los árboles del área urbana, y es muy posible que eso haya sucedido por la migración masiva de gente del altiplano.

Una vez en Palos Blancos, busco el hotel recomendado: Magdalena. Ahí una mujer muy amable me ubica en la segunda planta, le digo que más tarde pasará a buscarme un dirigente mosetén con el que me reuniré en el hall. El lugar cuenta con ducha caliente, baño privado, pero no wifi.

Apenas me instalo para bañarme a modo de refrescarme antes de empezar la jornada de trabajo y planificación, el vicepresidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosestén (OPIM), Gerardo Chairique, me responde al celular. Me dice que ya terminaron su asamblea y que puede pasar a conversar. Una vez reunidos en el pasillo del piso dos, habla sobre la problemática de la zona como consecuencia del ingreso de una empresa china para dedicarse a actividades mineras. Percibo su preocupación por la incursión foránea.

Amable en su trato y de buen humor, asiente a que saque fotografías a la denuncia formal que la OPIM presentó, junto con su asesor legal, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en contra de la Empresa china Minera Emgransbol S.R.L. En esta trabajan Alejandro

Xiadong, Xianodong Wu y Teresa Xiadong Wu, mencionados en el documento.

La empresa no figura en el Registro de Comercio de Fundempresa ni ocupa el noveno piso del edificio Multicentro en la ciudad de La Paz, tal como indican las tarjetas de los extranjeros. Emgransbol S.R.L. con asiento en Santa Cruz se dedica a la importación de materiales de construcción, según la base de datos de los proveedores del Viceministerio de Producción.

Palos Blancos —a 337 kilómetros del municipio de La Paz— es una población tranquila, con bastante comercio y variada oferta gastronómica. De esta última, la que más prolifera es la de carritos, debido a la situación económica golpeada por la pandemia. Sin embargo, en estos lugares nadie usa barbijo ni alcohol en gel. Se siente extraño usar el tapabocas, pero prefiero mantener distancia y protegerme, pero sobre todo cuidar a los comunarios. Las calles están llenas de vehículos sin placas, motos y carritos improvisados hechos con carcasa de lata que disfraza un triciclo a motor.

Quedamos con Gerardo desayunar a las siete de la mañana del día siguiente. Nos sirven el típico desayuno yungueño: arroz graneado, huevo frito, asado, tomate, café y pan por solo diez bolivianos, es decir, un dólar con cincuenta centavos. Adelanta que debemos esperar a su amigo Reynaldo, un experto conductor que domina los caminos de Palos Blancos y sabrá hacernos llegar sanos y salvos al río La Paz, a orillas de Pojponendo.

El impacto de la penetración de capitales chinos en la actividad ilegal aurífera es parecido a un pulpo, que arrastra sus tentáculos por aguas dulces de los grandes ríos amazónicos dejando a su paso destrucción. Se estima que más de una veintena de enormes dragas operan en estos afluentes. Una empresa china que opera con la fachada de cooperativa minera apostó a la división del pueblo mosetén del departamento de La Paz; le propuso la explotación aurífera en su Tierra Comunitaria de Origen a cambio de dinero y la apertura de caminos para el traslado de sus productos agroecológicos.

El pueblo indígena mosetén ostenta el primer título otorgado a una TCO en tierras bajas de La Paz desde el 2001, tras una larga lucha que se tradujo

en la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 y la perseverancia de su demanda ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En el carro de Reynaldo, voy junto a la ventana en el asiento de adelante para sacar fotos. Sorprende ver que conduzca este vehículo que tiene todo el parabrisas roto.

—¿Te lanzaron piedras? —le pregunto.

—No, un camión que estaba adelante hizo saltar las piedras directo al carro, ¿qué le podía reclamar?

Me pregunta qué quiero escuchar ante mi rechazo de tolerar la «música chicha», y me sorprende con un repertorio de clásicos románticos de los noventa, salsa y música moderna en inglés.

Durante el viaje trato de guardar en la memoria todos esos paisajes tropicales, de relajarme y disfrutar la experiencia, hasta que llegamos a una laguna. Reynaldo sale de la vagoneta, entra al agua turbia que le llega hasta por encima de las rodillas y vuelve a la movilidad. Temo que nos pida bajar del vehículo para cruzarla, pero nada de eso, enciende el motor y pasa. Estoy tan sorprendida que apenas logro filmar media proeza. Esa sería la primera laguna de seis más.

Así llegamos cerca del mediodía a Playa Verde, una comunidad indígena mosetén. Se suma a nuestra pequeña comitiva el cacique Lorgio Josesito, de facciones duras y caminar firme. Es el conductor del peque-peque, una pequeña embarcación de madera a motor en la que nos desplazaremos por el río La Paz.

Después de dieciséis minutos de caminata subimos a la embarcación. Miro el cielo y me alegro; nos acompaña un buen clima. Saco mi cámara y comenzamos a conversar con Gerardo. «No podemos pelear entre hermanos», reflexiona. Admite que hay diferencias internas como consecuencia de la incursión de la empresa china a territorios indígenas y el aval que consiguió de parte de una comunidad a espaldas del resto de la TCO a través, supuestamente, de la compra de la conciencia de un cacique.



Indígenas mosetenes discuten sobre las consecuencias del ingreso de la empresa china Minera Emgransbol S.R.L a su territorio. (Foto: OPIM)

En medio de estos cuestionamientos, el líder indígena afirma que el presidente de la OPIM, Máximo Merena Silva, fue dado de baja por mostrar «un comportamiento malo», y que solo sería repuesto en el cargo en cuanto subsane su posición.

—Si los hermanos de Muchane recibieron algún dinero de parte de la empresa china, puede considerarse como compensación económica por su ingreso al territorio que es ancestral, pero no se debe permitir la actividad minera.

Hace unas semanas, el dirigente junto con varios caciques en una inspección verificó la presencia de maquinaria pesada china en territorio mosetén, específicamente en la comunidad Chorere, que está entre Muchane y Apichana.

—Hemos pillado solo tres tractores, palas y volquetas, lo demás lo han escondido, pero tengo conocimiento de que son quince maquinarias.

La idea de la nueva incursión es comprobar si el campamento chino ya está instalado y si hay movimiento de maquinaria. Gerardo, también responsable de Tierra, Territorio, Recursos Renovables y no Renovables de la OPIM, dice sentirse indignado con el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y mal llamado «indígena», ya que no hace respetar los derechos de la TCO Mositén, por el contrario, impulsa la expansión de los interculturales y sus avasallamientos. Este fenómeno del que habla el dirigente es conocido también como el nuevo colonialismo.

—Este problema que se nos ha venido encima, nos ha agarrado en pañales porque la TCO Mositén no es zona aurífera, nos vemos obligados a pedir ayuda y a denunciarlo públicamente —expresa mientras se sujeta a los bordes de la embarcación, por los sacudones de esta.

Los tres viajamos sin chalecos salvavidas, un descuido muy grande, pues si ocurriera algún accidente, podría ser nuestra última incursión. En Apichana Chico tratamos de conversar con algunos líderes de la OPIM, pero sin mucha suerte. Ahí se une al grupo Martín Miro, un joven mosetén de tez morena y contextura algo musculosa. Se desplaza con agilidad y rápidamente toma el control del peque-peque; cual navegante experto nos dirige hacia Apichana Grande.

Una vez en la comunidad, una de las primeras cosas que llama la atención es el desmonte de una superficie equivalente a dos catos (3.200 metros cuadrados) y la apertura de un camino, que está inconcluso, detrás de las plantaciones de papaya. Caminamos entre los frutos que se cayeron de maduros.

Martín se adelanta en asegurar que nadie recibió dinero en esa comunidad, pero que la empresa china abrió el camino que sirve a los comunarios para sacar sus productos a la ciudad. Respaldan la versión una mujer de unos 45 años y una anciana que juega con su monito. Son sus familiares. Isabel Merena de Apichana Grande, que está dentro de una carpa mientras su

mascota juega con las manos de su madre, una anciana cariñosa, asegura que como mujer no está de acuerdo con la minería.

—Mata al agua, a los animales. Solo queremos el camino para sacar nuestros productos.

El joven mosetén, quien lleva una especie de faja en la cintura hasta la parte media de la espalda, nos lleva al lugar donde recientemente la empresa china deforestó y pasó con sus tractores a modo de abrir camino. Tratamos de caminar, pero nuestros pies se hunden en el barro. Nos llega hasta la rodilla. Gerardo debe ayudarme y yo a él.

—Parece que lo hizo adrede, a modo de castigarnos por haber venido a inspeccionar —le digo a Gerardo.

—Está enojado, clarito está —responde tras reírse de mi comentario.

De hecho, Martín nos trajo por este camino enfangado después de que sostuvo una conversación tensa con Gerardo. Este le llamó la atención por faltar a las asambleas de la TCO. El joven se contradijo: primero aseguró que vive junto con su familia en carpas, en medio de plantaciones de plátano, papaya y yuca, pero luego mencionó que tiene su casita río arriba.

El cacique Lorgio Josesito de Playa Verde deplora la deforestación y el desmonte, así como la apertura de un camino sin la consulta y el consentimiento de la TCO. Observa indiferencia de algunas autoridades comunales al llamado de ampliados y reuniones de emergencia. A un metro de él, Martín defiende la construcción de la vía, por parte de la empresa china, ya que su familia pueda llevar sus productos agroecológicos a ciudades pobladas, y está de acuerdo con que la maquinaria china pase al frente, a Muchane. También lamenta que la gente se deje llevar por los «dices» sin pruebas del supuesto soborno.

Gerardo recomendó no ir por Muchane, pues correríamos riesgos. —Están un poco malitos por allá, como se pusieron del lado de la china —advierte.

Por ello, no hablé con el cacique aludido, quien habría negado haber recibido dinero de la minera china. Pero habría preferido dar un paso al cos-

tado de la OPIM y hasta anunciado la conformación de otra organización paralela.

Los dirigentes advierten que la AJAM, desde hace algunos años, implementa proyectos mineros, prueba clara de ello es el cuadrículado minero que hizo en la TCO. Esta acción afectó a territorios indígenas y zonas de producción agroecológica.

Este asunto es complicado, según el dirigente, debido a la distribución territorial de la TCO. Esta abarca el departamento de La Paz y sectores de Cochabamba y Beni, que comprenden los municipios de Palos Blancos, Morochata y Moxos. Está dividida en dos bloques, A y B, llamados Coven-do y Santa Ana, a su vez cada uno está conformado por siete comunidades.

Gerardo cuando habla de su pueblo no duda en calificarlo de «guerrero e indomable».

—Nunca damos el brazo a torcer y clara muestra de ello es que nuestro territorio está mejor conservado que otros territorios indígenas. Cuando nos provocan no dudamos en usar la flecha para defender nuestros derechos.

En esta zona que ya estaba cuadrículada se posibilitó los derechos mineros, lo que afecta al río La Paz y a comunidades como Muchane, Inicua, Pojponendo y Santa Ana. Según Chairique, toda la TCO está cuadrículada, 376 cuadrículas están comprometidas, es decir, quince mil hectáreas.

En la travesía no encontramos la maquinaria, sin embargo, la huella que dejó en la selva es más que prueba para demostrar el desmonte y la deforestación. Los testimonios también dan cuenta de la presencia de la empresa china en territorio mosetén.

El retorno a Pojponendo en el peque-peque fue difícil. Mientras se pierden en el horizonte los últimos rayos del sol, la crecida del río dificulta la subida. Llegamos de noche a la orilla de donde empezamos el recorrido. Nos apuramos porque Reynaldo debe asegurar nuestro retorno a Palos Blancos, con el riesgo que conlleva esta vez cruzar en vagoneta lagunas y caminos gredosos.



Cacique mosetén se desplaza en un peque peque por el río La Paz en busca de las aperturas de caminos que hizo la empresa china en su territorio. (Foto: JM-ANA)

Cerca de las once llegamos a Palos Blancos y lo primero que hacemos es comer pollo y tomar una gaseosa. A esta hora ya no hay mucho de donde elegir. Al día siguiente ajusto mi tiempo, antes de volver a La Paz debo entrevistar al alcalde Weimar Mamani (MAS). Este me recibe en su oficina, ubicada frente a la plaza principal, para hablar sobre la situación minera.

—El municipio de Palos Blancos rechaza la actividad minera, el Concejo Municipal sacó una ley que declara a Palos Blancos libre de contaminación minera, por lo tanto, vamos a respaldar. Hay intereses que están ingresando al municipio y lo están haciendo por Teoponte —afirma con seguridad.

Sin embargo, admite que ante las denuncias el Ejecutivo y el Concejo formaron una comisión para verificar en Muchane la presencia de maquinarias para el lavado del oro.

—Hemos visto y hemos ido al lugar; hay indígenas, hermanos mosetenes que una parte autoriza y otra parte está en desacuerdo.

Enfatiza que Palos Blancos es un municipio agroecológico, y muestra de ello son los cítricos que producen todo el año, además de papaya, yuca y plátanos de excelente calidad. Recuerda que el Ceibo, industria chocolatera, se provee de cacao de la región para el consumo interno y exportar sus productos a los mercados más exigentes.

Ya de retorno en La Paz después de sortear bloqueos de cocaleros me reúno con el asesor jurídico del pueblo mosetén, Edgar Quezada. Un café de Miraflores es el punto de encuentro; ahí sobre la mesa extiende un mapa. Se trata del cuadrículado minero sobre la TCO, aprobado por la AJAM.

—Son 376 cuadrículas que han sido reservadas por un cooperativista minero de apellido Galarza, que ha usado el nombre de la comunidad de Muchane para lograr los derechos mineros y luego venderlos a terceros, incluidos los chinos —asegura.

Hasta usaron el nombre del dirigente indígena Álex Caimani para validar un «proceso de consulta».

—¿Es irreversible esta situación?

—Sí, si se pelean entre ellos y están divididos.

Este caso llegó semanas después hasta la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien vía Zoom escuchó las denuncias sobre el avasallamiento y la penetración de la empresa china minera en territorio mosetén y la situación de los defensores de la naturaleza.

El reportaje «Empresa china divide al pueblo mosetén para ingresar a su TCO en busca de oro» fue publicado por la Agencia de Noticias Ambientales el 31 de marzo de 2021 (<https://anabolivia.org/empresa-china-divide-al-pueblo-moseten-para-ingresar-a-su-tco-en-busca-de-oro/>).



Imagen referencial (Foto Jimena Mercado-ANF)

Dragas chinas y colombianas toman los ríos amazónicos paceños

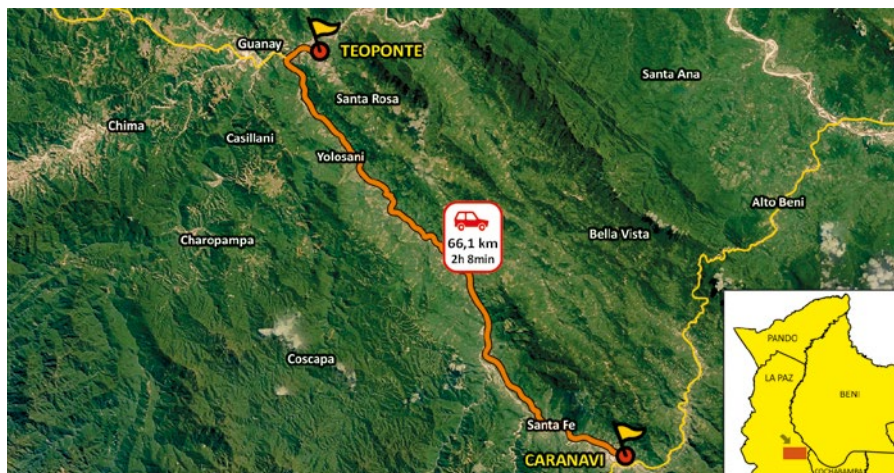
La Paz-Caranavi

El primer tramo de unos 181 kilómetros, desde la urbe paceña hasta la ciudad intermedia de Caranavi, tomó cuatro horas y doce minutos.



Caranavi-Teoponte

El segundo tramo, de 66,1 kilómetros, fue desde Caranavi hasta el municipio aurífero de Teoponte. El viaje duró dos horas y ocho minutos.



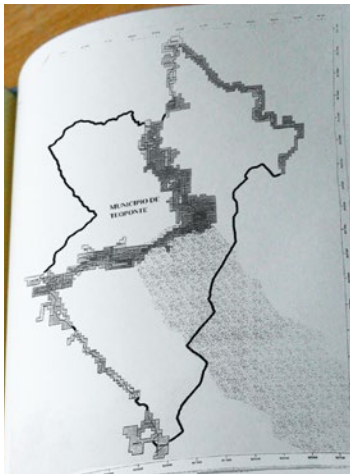
Teoponte-Guanay

El tercer tramo comprendió Teoponte-Guanay y Guanay-Teoponte. Entre ambos municipios hay una distancia de 12,9 kilómetros por camino de tierra y se tarda 27 minutos.



Teoponte- Rurrenabaque

El cuarto tramo comprendió los ríos Kaka y Beni desde el municipio paceño de Teoponte hasta la localidad beniana de Rurrenabaque. El viaje en peque-peque tomó más de diez horas.



Mapa de áreas mineras en el municipio de Teoponte. Fuente AJAM.

Mapa de cuadrículas mineras en Teoponte

El informe de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) muestra la situación de los permisos para la explotación de oro, a junio de 2018, en Teoponte. Se emitieron cuatro autorizaciones transitorias especiales por pertenencias (exconcesiones), veintinueve autorizaciones transitorias especiales por cuadrícula, cincuenta y dos contratos mineros que son antes de la Ley 535, trece áreas mineras en trámite, un área en trámite administrativo en aplicación a la Ley 403 y cuatro áreas reservadas para el Estado.

Dragas chinas desembarcan en Cachuela Esperanza

Riberalta-Cachuela Esperanza

La distancia entre la ciudad de Riberalta y el municipio de Cachuela Esperanza es de 93,2 kilómetros. El viaje por camino de tierra dura una hora y cincuenta y tres minutos.

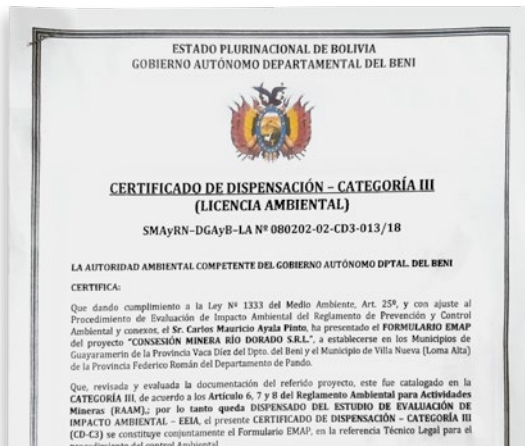


Cachuela Esperanza- Oro Blanco

El segundo tramo fue desde Cachuela Esperanza hasta la isla Oro Blanco sobre el río Beni Bajo. En esta isla se instaló el campamento de la empresa Río Dorado S.R.L. y ciudadanos chinos operan grandes dragas de última generación.



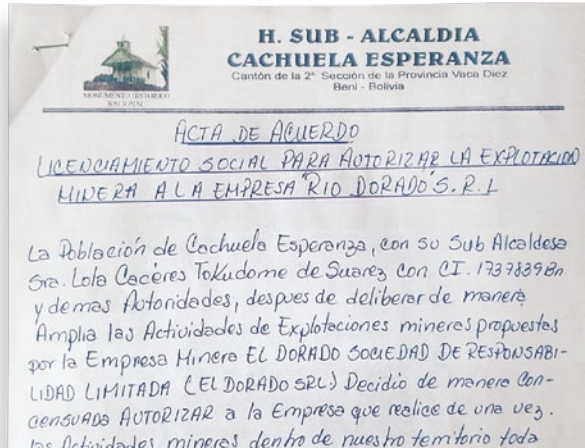
Licencia ambiental a favor de Río Dorado S.R.L.



La licencia ambiental otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Beni a favor de la Empresa Minera Río Dorado S.R.L. comprende los municipios de Guayaramerín de la provincia Vaca Díez y Villa Nueva (Loma Alta) de la provincia Federico Román del departamento de Pando.

Acta de acuerdo

El Acta de Acuerdo de Licenciamiento Social, firmado entre la Empresa Minera Río Dorado S.R.L., la subalcaldesa de Cachuela Esperanza y otros representantes de la sociedad civil del lugar, autoriza la explotación minera y señala: «Se permite a la empresa realizar el ingreso y labores mineras que correspondan y sean necesarias», con el compromiso de «beneficiar a toda la población que necesita de manera urgente, por la crisis que nos azota».



Patente minera otorgada por la AJAM

La patente minera otorgada, el 26 de noviembre de 2016, por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a la empresa Río Dorado S.R.L. establece ochenta cuadrículas mineras a favor del titular Carlos Mauricio Ayala.



Arcopongo: sinónimo de ausencia de Estado y presencia de grupos armados

La Paz-Chulumani

El primer tramo, desde la terminal de Minasa en la ciudad de La Paz hasta el municipio de Chulumani en Sud Yungas, comprendió un viaje por tierra de tres horas con treinta minutos. La distancia es de 112 kilómetros.



Chulumani-La Asunta

El segundo tramo, desde el municipio de Chulumani hasta La Asunta, es de 86,7 kilómetros. El viaje por tierra duró tres horas y quince minutos.



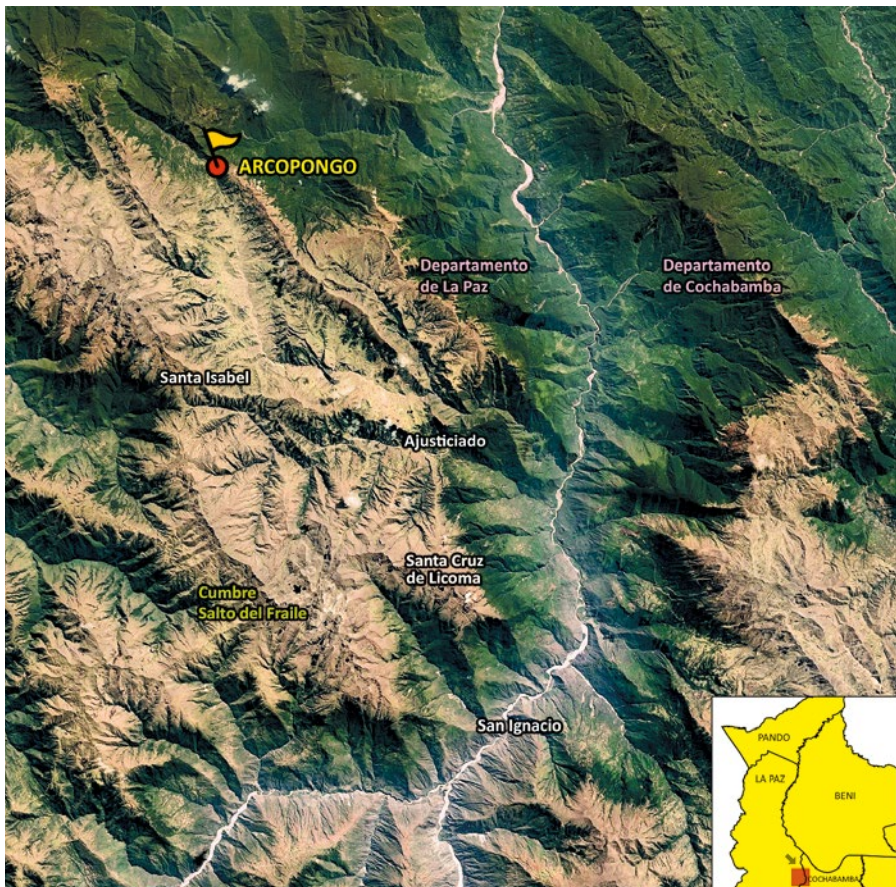
La Asunta-Arcopongo

El viaje por caminos de tierra desde el municipio de La Asunta hasta el cantón Arcopongo de la provincia Inquisivi, tercer tramo, duró más de dos horas.



Arcopongo

En el cantón Arcopongo, de la provincia Inquisivi en el departamento de La Paz, no solo se registra la presencia de grupos armados, sino también, tal como muestra la imagen satelital de Google Maps, fue impactado ambientalmente por la extracción intensiva de oro que implicó la deforestación de cientos de hectáreas de bosques y arbustos, el desvío del río Chaquety, entre otros.



Tacanas se convierten en mineros

La Paz-Cobija

El primer tramo comprendió un viaje en avión desde el aeropuerto de El Alto hasta la capital de Pando, Cobija. El recorrido se hizo en una hora y cinco minutos.



Cobija-Chivé

El segundo tramo implicó un viaje por carretera desde la ciudad de Cobija hasta el municipio de Chivé, a orillas del río Madre de Dios. El recorrido de 176 kilómetros se realizó en tres horas con cuarenta minutos.



Chivé- Las Mercedes

El tercer tramo, río Madre de Dios y sus afluentes, desde el municipio de Chivé hasta la comunidad Las Mercedes, que forma parte de la Tierra Comunitaria de Origen Tacanas II, fue realizado en deslizador — embarcación fluvial— en unas tres horas.



Empresa china divide al pueblo mosetén

La Paz-Caranavi

El primer tramo fue desde la terminal Minasa de la ciudad de La Paz hasta la población intermedia de Caranavi. El viaje por tierra duró cuatro horas y doce minutos. La distancia es de 181 kilómetros.



Caranavi- Palos Blancos

El segundo tramo, de la población intermedia de Caranavi al municipio de Palos Blancos, implicó un viaje por tierra de dos horas. La distancia es de 77,8 kilómetros.



Palos Blancos- Inicua

El tercer tramo fue desde Palos Blancos hasta Inicua, comunidad situada al borde del río La Paz en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Mosestén, departamento de La Paz. El recorrido de 34 kilómetros tomó 54 minutos.



Inicua-Muchane

El cuarto tramo, de cinco horas, incluyó la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Mosestén en el departamento de La Paz y comunidades indígenas entre Inicua y Muchane.



Cuadrículas mineras

El representante legal de la TCO Mosestén, Edgar Quezada, muestra el cuadrículado minero aprobado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Este comprende 376 cuadrículas sobre el territorio indígena.



Resumen de rutas de recorrido de la crónica





TRAS EL DORADO

CRÓNICAS DE LA EXPLOTACIÓN DEL ORO EN LA AMAZONÍA

En este libro, Jimena Mercado ofrece cinco historias que navegan en torno a la explotación del oro sobre los ríos amazónicos de Bolivia. Estas nos llevan desde los territorios indígenas leco, mosetén y tacana, desde los cultivos campesinos de Los Yungas de La Paz, pasando por Beni y Pando. Recorreremos con la autora caminos asfaltados y de tierra, y sobre todo ríos como el Chaquety, Kaka, Beni, Beni Bajo o Madre de Dios.

A lo largo de estos relatos entramos en la compleja situación que vive la Amazonía de Bolivia desde que se ha disparado la producción de oro aluvial. Las leyes han sido burladas por nacionales y extranjeros, casi con el permiso del Estado poniendo en jaque a las comunidades indígenas con los distintos impactos sociales y ambientales que traen sus relaves.



◀ Volver a contenido



Centro de Documentación e Información Bolivia



Periodistas trabajando para periodistas